

Historia del Movimiento Obrero en el Cono Sur de América

(Argentina, Chile, Uruguay y Brasil)

12

Serie cuadernillos de capacitación sindical

El presente cuadernillo es una síntesis libre de los textos originales de diversos autores, los cuales abarcan fragmentos sobre períodos históricos seleccionados del movimiento obrero del cono sur de América.

***Centro de Información y
Documentación “8 de marzo”.***



Sindicato de Trabajadores Municipales de San Isidro.

➤ UNA HISTORIA OBRERA DE BRASIL: 1888-1979

RAIMUNDO SANTOS

Es al pueblo al que hay que mirar. A sus aspiraciones, a sus necesidades, a su organización, a su formación ideológica, a su movilización, a su persuasión y convencimiento mediante una política activa, inteligente y eficaz.

SALVADOR ALLENDE

NOTA PREVIA

Una historia obrera no puede ser la narración de sucesos solamente relacionados con el grupo social de nuestro interés.

Es necesario poner atención a tres aspectos importantes:

- Observar cómo una masa de hombres se constituye como clase y revelar aquellos procesos que le dan el potencial de fuerza renovadora. No basta reafirmar la tesis general acerca de la vocación transformadora de la clase obrera, corresponde analizar la forma en que se impuso el capitalismo en el país en cuestión, ver cómo el Estado desempeñó su función de garante máximo de todo el sistema, cuáles fueron los cambios introducidos, etc.
- Una historia obrera es más que todo la historia de las intervenciones con las que dicha clase se hace presente o condiciona la vida política de la nación.
- Finalmente, hay que ubicar aquel grupo más pequeño de hombres u organizaciones, que por largos años se asocian e intentan ligarse a esa misma masa, desarrollando sus ideas, apenas latentes, luchando junto con ella.

He aquí la aspiración completa: contar la historia de la formación de su conciencia y organización, o más precisamente, de la elaboración de la estrategia alternativa para los grupos subalternos.

I. LA PROTESTA ANARCOSINDICALISTA (1888-1919)

El proceso de nacimiento de la industria en Brasil, que permite referirse a los primeros núcleos de obreros, tiene sus orígenes en la segunda mitad del siglo XIX.

- Por cierto que no puede esperarse en aquella sociedad esclavista un desarrollo importante de las actividades manufactureras, ni una ocupación en gran escala de la fuerza de trabajo asalariada. Sólo se

pueden observar movimientos socialistas significativos a partir de la modificación del tipo de conexión de la economía brasileña con el exterior, cuando comenzaron a gestarse procesos que hicieron más compleja la división social del trabajo y centraron la diferenciación en el interior de la sociedad.

Las prácticas proteccionistas a partir de 1844, cuando caducaron los tratados comerciales con Inglaterra, aparejaron un importante aumento en la liquidez de los empresarios nacionales. El capitalismo cafetalero permitió el logro de grandes ganancias, representó el progreso (la creación de puertos, servicios financieros, etc.) y luego fue la base del crecimiento de la región centro-sur y de sus industrias. La abolición de la esclavitud en 1888 aceleró finalmente ese lento ordenamiento de factores: los capitales tuvieron que agilizarse y la fuerza de trabajo, ahora libre y movilizable, se volvió también un elemento dinámico.

En líneas generales: El avance de la economía capitalista de exportación creó condiciones para que se formara un núcleo de trabajadores en el sector de servicios, arrastrando consigo un aumento en el consumo masivo y dinamizando las pequeñas industrias complementarias del polo capitalista y en estado estacionario antes de la expansión cafetalera. Estas industrias se vieron estimuladas para cumplir el importante papel de atender el consumo inmediato en crecimiento, lo que llevó finalmente a ocupar más fuerza de trabajo en actividades urbanas. Debido al alto costo de importación, se hizo aconsejable producir los bienes localmente.

La presencia de un nuevo “personaje”, el proletariado, se limitó a algunas ciudades como Sao Paulo, Santos y Río de Janeiro, las centrales de los servicios del polo capitalista y de la administración pública. La ciudad reunió las condiciones mínimas para permitir el desarrollo de la protesta popular.

- Mientras que el eje fundamental de la economía y el poder de las oligarquías se basaba en el campo, el activismo político de los grupos subordinados se manifestaba en el pequeño universo urbano, encerrado en la isla de “los ideales de la ciudad”, sin grandes posibilidades de modificar la correlación entre las clases y en el conjunto de la sociedad.

El cuadro político que se abrió tras el derrocamiento de la monarquía en 1889, presentó un espectro variado: republicanos y socialistas, anarquistas y marxistas, partidarios del socialismo utópico, constituyeron el activismo político de la sociedad de la época. Fue muy distinta la incidencia de cada uno de ellos en la estructura del poder y en la correlación de fuerzas de la sociedad. La “gran política” siguió siendo hasta 1930 un asunto que sólo atañía a las “minorías cultas”.

La fuerza de trabajo inmigrante no sólo se hizo sentir por su elevado peso cuantitativo. Esa presencia extranjera significaba también la presencia del anarcosindicalismo. En ausencia de un procesamiento teórico propio, las ideas de la “revolución social” le servirían para expresar una cierta visión ante el capitalismo en Brasil.

- El primer Congreso Obrero Brasileño, realizado en 1906, decidió constituir la Confederación Obrera Brasileña (COB), que finalmente se fundó en 1908. Dicho evento significó el comienzo del tránsito del movimiento obrero de una fase mutualista y corporativa hacia una político-social.

Entre 1917 y 1921 comienza un proceso “autocrítico”. La clase obrera de Sao Paulo y Río de Janeiro se puso al frente de movimientos huelguísticos que sacudieron no sólo la indiferencia de las clases dominantes, sino que también pusieron a prueba el anarcosindicalismo. Estos acontecimientos marcaron su declinación.

La Revolución rusa de octubre de 1917 contribuiría en mucho a la creación de los nuevos grupos de comunistas: el socialismo comenzaba a tener una fuerte atracción entre la intelectualidad. La influencia de la Revolución rusa no sólo estimuló la adhesión al programa maximalista, sino que contribuyó a superar el socialismo utopista, llegando en los años siguientes al abandono de algunas concepciones de la táctica revolucionaria.

Al comenzar la década de 1920 el proletariado continuaba sin conexión con otras capas sociales; la superación de este rasgo tan fuertemente enraizado sólo se dará cuando el movimiento obrero se organice políticamente y sea capaz de convertir la protesta en comprensión del momento y ligarla con la perspectiva de constituirse en una fuerza más eficaz dentro de la sociedad.

II. LOS AÑOS VEINTE: NACE EL PARTIDO COMUNISTA

El ahondamiento de la crisis económica y la acumulación de dificultades en la actividad cafetalera, hacen entrar en un colapso a la economía brasileña cuando sobreviene el crack de 1929. La crisis era también política, ya que el viejo orden republicano se resquebrajaba en medio de la insurgencia militar y aumentaban las pugnas entre las oligarquías regionales; finalmente, la crisis asume un carácter social, en tanto que en estos años las clases oprimidas buscan organizarse política e ideológicamente.

Una particularidad de la constitución del capitalismo brasileño es que el importante crecimiento de las actividades industriales no habría de significar la imposición más o menos inmediata de un perfil burgués al orden estatal. El régimen republicano permitía tanto la prosperidad de la fracción agraria, como los negocios industriales.

Las organizaciones obreras experimentaban un cambio importante en su forma de estructuración, tratando de dejar atrás el viejo principio del sindicato por oficio, pasando a estructurarse por industrias.

Cuando en 1922 se creó el Partido Comunista del Brasil (PCB), se observa una convergencia orgánica entre los remanentes de las minorías activistas, con una experiencia muy reciente en las prácticas

anarcosindicalistas y que constituyen las primeras bases del nuevo partido y, por otro lado, el elemento intelectual, que estaba en proceso de asimilación de las ideas socialistas y en trance de “reemplazar” definitivamente a aquella memoria de clase del inmigrante europeo y asumir su función entre los primeros movimientos obreros propiamente dichos.

Hacia el final de la década de los años veinte, el movimiento obrero indudablemente había cambiado de fisonomía, de orientación y otras eran las formas organizativas. De núcleos obreros en protesta violenta que se expresaban en acciones aisladas o inconsecuentes, de movimiento “antipolítico”, pasó a estructurarse socialmente buscando entendimiento con otras corrientes políticas. Pero este avance no permite vislumbrar ninguna ilusión acerca de la incidencia del movimiento obrero en la correlación entre las clases y en la sociedad.

- 1930 significaría una ruptura con el orden oligárquico, pero también una ruptura con el transformismo liberal-burgués de la República Vieja y el paso a otro tipo de corporativismo. En ese pasaje, Estado y empresarios intentarían remover obstáculos para la constitución del capitalismo industrial en Brasil, remodelando el orden constituido.

III. DESMOVILIZACIÓN Y CONTROL REPRESIVO (1930-1945)

El 3 de octubre de 1930, Getúlio Vargas, el perdedor en los fraudulentos comicios presidenciales, se levantó en armas al frente de una coalición, que iría a protagonizar en los quince años siguientes el proceso de instauración del orden burgués.

La Revolución varguista tenía un espectro muy particular:

- El Partido Demócrata, que expresaba la protesta de las capas medias paulistas;
- Los tenientes, que se oponían a nuevos comicios y exigían la “modernización del país”;
- Los generales del ejército, preocupados en canalizar la protesta *tenentista*;
- Grupos cafetaleros, que reclamaban más protección oficial;
- Los políticos oligárquicos, integrantes de la Alianza Liberal.

Luego se produjeron cambios en este cuadro político y realineamientos de fuerzas. En una coyuntura en que se equilibraban las fuerzas decisivas, el PC trató de constituirse en un frente, llamado Alianza Nacional Libertadora (ANL). Consiguió el apoyo de las capas medias.

En julio Prestes llamó a la formación de “un gobierno popular nacional-revolucionario” y reclamó la entrega del poder a la ANL. El régimen varguista respondió con represión y arrestos, precipitando al PCB al camino de la insurrección, desencadenada en noviembre.

➤ Los acontecimientos de 1930 deberían ser vistos, no como una lucha entre grupos de intereses industriales y un antagonista anticapitalista, sino como una diferenciación en el interior de la clase dominante, como una coyuntura política en la que los actores revolucionarios – una amalgama de fracciones y sectores – buscaban abrir el sistema político y, más que eso, promover la diversificación del sistema económico. La realidad expresaba una movilización subterránea del amplio espectro de la sociedad civil, que empujaba al país hacia la ruptura con el *statu quo*.

La Revolución de 1930 provocó cambios favorables a la diversificación económica, y después de 1937, Vargas se orientó por un claro proyecto de modernización capitalista.

La oligarquía y los industriales necesitaban el apoyo de los tenientes primero, y de los propios trabajadores después. Pero para asumir la “representación” de las clases subalternas, el Estado tendría que asegurarse previamente el control de las organizaciones obreras.

Nos encontramos con una legislación tutelar y represiva. La Ley sindical 19.770 de 1931, convirtió a los sindicatos en parachoques de los conflictos entre el capital y el trabajo, transformándolos en órganos colaboradores de los poderes públicos. Esta legislación se orientaba a descabezar a los sindicatos de los líderes de origen extranjero, aun con cierta importancia en el medio obrero. Por otro lado el necesario reconocimiento del sindicato por el Ministerio del Trabajo se transformó en la institucionalización del control.

Los tres pilares de la política obrera de Vargas:

- Desmovilización
- Despolitización
- Desprivatización

La puesta en práctica de esta política encontró resistencia: siempre que hubo desequilibrios entre las fracciones burguesas, el movimiento obrero aprovechó la ocasión para moverse autónomamente. Hasta el año 1937 es historia de represión.

La estructura oficial fue empadronando una masa proletaria nueva, muy distinta a aquella que movió el sindicalismo de las minorías activistas y de los primeros núcleos del PCB. El obrero anterior a 1930, con frecuencia de origen extranjero y anarcosindicalista, da paso al nuevo trabajador nacional, recién llegado al “mundo industrial”, con precaria o nula memoria de clase y muy receptible al mensaje oficial de tipo paternalista.

El sindicalismo oficial no encuentra sólo la resistencia de las posiciones clasistas, se enfrentará también con obstáculos inherentes al proceso de existencia misma de la clase obrera. Una ley busca dar a los sindicatos del año 1939 características más atractivas: la promoción de cooperativas de

consumos y de crédito, asistencia judicial, escuelas, etc, son sus nuevas funciones.

La desmovilización represiva aparejó resultados destructivos; ente 1935 y 1950 ocurrieron importantes cambios en la composición de los cuadros sindicales. Los viejos militantes anarcosindicalistas, comunistas y socialistas habían sido remplazados por otros, nombrados o elegidos siempre con aprobación oficial.

IV. LA REDEMOCRATIZACIÓN “DESDE ARRIBA” (1945-1951)

En los últimos momentos de Vargas y del Estado Novo, la línea divisoria entre la democracia y un nuevo conservadurismo se hizo borrosa. Aislado políticamente, amenazado con un golpe de estado, Vargas entiende que su relación con las clases subalternas debe cambiar: para que el movimiento sindical pueda servir a sus propósitos es necesario que se transforme en fuerza de presión. La alianza de los comunistas y el PTB en la campaña de la Constituyente con Vargas se volvía entonces una forma posible de impulsar la movilización de masas. El PCB aprovecha el espacio político abierto para convertir a la clase obrera y convertirse a sí mismo en una fuerza social.

El golpe militar de octubre de 1945 revela el perfil que iba asumiendo la “alianza del orden”. Los realineamientos de fuerza comenzaron a llevar a la izquierda a situaciones desfavorables.

Los comunistas y petebistas resolvieron proseguir el evento para concluir el trabajo previo de las comisiones y decidieron crear la Confederación de los Trabajadores del Brasil (CTB), mientras el Ministerio del Trabajo a su vez impulsaba la formación de otro organismo paralelo, la Confederación Nacional de los Trabajadores (CNT). Cuando sobrevino la presión resultante de la guerra fría en 1947, el PCB fue inmediatamente ilegalizado y anulados todos los mandatos de sus parlamentarios. Fue prohibido definitivamente el MUT¹ y cerrada la CTB. Entre 1946 y 1950, los sindicatos quedaron sin elecciones y 234 de ellos fueron intervenidos.

- En 1944 habían cambiado las relaciones entre el Ministerio del Trabajo y los sindicatos, en un sentido de movilización y aflojamiento de la estructura corporativista.

V. LA IZQUIERDA ANTE LA CRISIS DEL PODER (1955-1964)

El capitalismo había provocado importantes cambios en la estructura económica y social de Brasil. El volumen físico de la producción industrial se duplicó, y la clase obrera industrial se fortaleció numéricamente. En el campo hubo un avance del capitalismo y también creció el contingente de asalariados y semiasalariados agrícolas. Se fortaleció la burguesía industrial interesada en

¹ Movimiento Unitario de los Trabajadores, constituido en 1944 por los comunistas.

el desarrollo del mercado de consumo interno y en esa medida tendiente a aceptar un cuadro político más progresista.

El PCB postulaba como condición para cumplir “las tareas antiimperialistas, antifeudales, nacionalistas y democráticas”, la movilización de un frente único de masas, a partir de las múltiples formas en que venían expresándose las clases y sectores de clases de signos progresistas en el marco del movimiento nacionalista. Los comunistas se atribuían el compromiso de empeñarse en dar a este movimiento un carácter de masa, impulsar su coordinación a escala nacional y lograr una polarización: las fuerzas progresistas de un lado, y la resistencia conservadora, del otro.

Un índice del nivel alcanzado por la resistencia obrera son las huelgas ocurridas entre 1959 y 1963. En 1962 pararon un millón de trabajadores, cifra que sube a tres millones en el año siguiente.

La coyuntura contenía elementos potencialmente revolucionarios:

- Por un lado, en la medida en que las fuerzas más definidas del frente único en formación (PCB, PTB y PSB) tenían una presencia nacional cada vez más efectiva y en que se habían decantado posiciones progresistas en los demás partidos.
- Por otro, porque crecientemente aparecían expresiones de masas que se extendían a toda la sociedad, movilizaciones sindicales, campesinas, estudiantiles, en diversas áreas de la opinión pública, entre los católicos progresistas y la intelectualidad democrática.

Los comunistas orientaban su acción hacia el sector obrero de la industria tradicional y hacia los trabajadores del sector público, debido a que allí era posible desarrollar un sindicalismo más acorde a la legislación vigente:

- Por un lado, en estos centros de trabajo las reivindicaciones se reducían a las condiciones de trabajo y al cumplimiento de las leyes laborales.
- Por otro lado, el sindicato resolvía las diferencias entre los colectivos de trabajadores mediante su propio verticalismo, ya que únicamente él organizaba a todas las categorías por más heterogéneas que éstas fueran en la rama industrial.

Por esta vía legal, demandas particulares que podrían surgir en las diversas fábricas, se uniformaban en un problema general del conjunto de los afiliados. Eso les daba a los trabajadores de las empresas menos modernas una posición privilegiada en la estructura sindical en la medida en que eran los más activos en el sindicato aun cuando ya no fueran el grupo más importante en el mundo de la producción.

La historia obrera del período muestra cómo los sindicatos y, en definitiva, el movimiento obrero, se volvían cada vez más una fuerza interviniente en la vida política. Hacia 1964, las organizaciones obreras más importantes habían

pasado a manos de los comunistas y del PTB, y en escala mucho menor de otros grupos socialistas.

V. LA CUESTIÓN DE LA DEMOCRACIA (1964-1949)

El golpe militar impidió que se rompiera totalmente el esquema de dominación, bloqueó la vía abierta al movimiento popular y vino a *recuperar* el crecimiento del capitalismo buscando infundirle algún dinamismo. El Estado dispuso medidas tendientes a transformar el capital financiero en el elemento dinámico del sistema y así franquear la economía al control extranjero. Desde 1968 se implantó el régimen de terror: fuerte disciplina en las relaciones sociales de producción y control político de la población.

- Comienza a percibirse con claridad el cambio sustancial de la función del aparato productivo estatal: de elemento de contención a la dependencia externa, en los años cincuenta y sesenta, ahora, bajo los gobiernos militares, será la base principal de la acumulación transnacional.

Comienza la caída del nivel de salario real y empeoran las condiciones del nivel de vida del trabajador; se revisó la ley de huelga; se dejó sin efecto del derecho de estabilidad en el empleo; se llevó a cabo una represión abierta y la ilegalización de las izquierdas.

En sus manifestaciones exteriores, el nuevo sindicalismo se distingue del anterior a 1964:

- Primero, en cuanto al contenido de las reivindicaciones mismas (surgen temas como la duración de la jornada, las horas-extra y las cuestiones del funcionamiento de la empresa misma, como participación, contratación del personal, promoción y otras);
- Segundo, en cuanto a las formas de negociación y de organización de la masa obrera (tiende al entendimiento directo con la patronal y se moviliza en torno a problemas más focalizados en las empresas, diferenciándose del período de la “presión sobre el Estado”, pues ahora la organización obrera es un organismo más del ámbito interno de las fábricas.

El proceso de rearticulación en el período post-64 comenzó con las presiones para que se realizaran elecciones sindicales y los constantes esfuerzos por recuperar algunos de los sindicatos intervenidos, un nivel de resistencia primario. Lo novedoso fue la reaparición de las comisiones de fábrica y la preparación del movimiento desde adentro de la empresa. Entre 1970 y 1973, el período de mayor terror del gobierno, se prosiguió con la paciente lucha de rescatar a las organizaciones obreras; la práctica de la huelga reaparecía bajo formas cautelosas. También comenzó a notarse en los pronunciamientos y acciones sindicales la constante presencia de los sectores productivos más importantes y de las grandes empresas.

El año 1977 significa un salto de calidad, no sólo porque se acentuaron la protesta y las demandas obreras, sino que asumieron una forma multitudinaria y se ligaron con la lucha política general contra el régimen dictatorial.

VI. EPÍLOGO INCONCLUSO

La comprensión de tres procesos ayuda a captar el momento presente:

- La descomposición que el régimen padece desde 1974 y que se acentuó a partir de 1977 (dificultades de expresión para ciertos sectores capitalistas; dificultades para mantener cohesionado al aparato político);
- Un proceso de agregación de las fuerzas democráticas y luego, dentro de éstas, la reaparición de los sectores populares. Este frente político opositor carece de un carácter de permanente movilización y de formas de coordinación de sus iniciativas;
- Al mismo tiempo que la protesta antidictadura se generalizaba en toda la sociedad, por la vía de la represión terrorista se llevó a cabo la desarticulación de las izquierdas, con el claro propósito de sacarlas de la escena política y separarlas de su base social.

La construcción de una voluntad colectiva, capaz de marcar el rumbo de los acontecimientos próximos, para hacerse realidad efectiva, no depende sólo de las condiciones económico-estructurales, ni está condicionada exclusivamente por la reglamentación estatal, sino que tiene mucho que ver con las concepciones de los representantes de los grupos subalternos y de cómo orientan opciones y deciden acciones, pertinentes, ineficaces o negativas.

El debate en el interior de las izquierdas llegó a una encrucijada entre las propuestas de:

- El “frente popular”: Proposición que asigna una mayor jerarquía a la contradicción económica (entre el capital y el trabajo), dejando en un segundo nivel a la contradicción democrática. Considera la acumulación de fuerza casi exclusivamente en las clases populares, es decir, como un proceso autogenerador, minimizando el papel de los grupos dominantes, en tanto “representantes” aunque eventuales de las clases subalternas.
- El “frente democrático”: Quiere retratar una situación en la que el actual régimen se retira “organizadamente” y en la que las clases dominantes buscan reestructurar el sistema del orden. Esta noción pretende captar que el éxito burgués depende del aislamiento social y político de las izquierdas. Esta fórmula propone que sólo la movilización multitudinaria en torno a cuestiones comunes puede batir a la dictadura

y llevar a esas masas, por propia experiencia, a un proceso de profundización de demandas y a situaciones más caracterizada por sus esenciales intereses de clase.

➤ EL MOVIMIENTO OBRERO CHILENO

ALEJANDRO WITKER

I. EL DESPERTAR DE LOS TRABAJADORES: 1850-1909

1. Chile en el siglo XIX: poder oligárquico y neocolonialismo

La implementación del liberalismo como rector ideológico del Estado correspondió al momento histórico en que Chile se articuló en el mercado mundial capitalista a través del control británico sobre la rama más dinámica de la economía de fines del siglo: la minería.

Los tres pilares fueron:

- Los terratenientes, que exportaban trigo y disponían medios de pago para importar manufacturas de alta calidad;
- Los ricos mineros exportadores de plata, cobre y salitre;
- Los comerciantes, que se beneficiaban de la “necesidad” de importar lo que no se producía en el país.

➤ *Ninguno de los tres tenía el más mínimo interés de que Chile se industrializara.*

El presidente Domingo Santa María, que gobernó entre 1881 y 1886, había declarado su vocación colonial; mientras que su sucesor, José Manuel Balmaceda, trabajó en la dirección inversa.

Las dos líneas se enfrentaron en 1891. El presidente Balmaceda fue derribado por una coalición oligárquico-imperialista que frustró definitivamente un proyecto nacional autónomo para articular sus intereses en los marcos del neocolonialismo.

2. El grito de los igualitarios y la movilización del artesanado

Las primeras expresiones orgánicas de los trabajadores chilenos fueron las Sociedades Mutualistas, que agruparon para fines de “socorros mutuos” a los artesanos de diversos oficios.

Las luchas artesanales tuvieron por su carácter clasista pequeñoburgués alcances sociales e ideológicos limitados; sin embargo, fue en el seno de esas sociedades donde muchos obreros adquirieron las nociones de organización y el impulso primario hacia la lucha social.

El Partido Democrático de Chile (PDCH) se fundó en noviembre de 1887 como un desprendimiento populista del Partido Radical, que recogió las aspiraciones de reformistas del artesanado y de grupos de obreros que descubrían la “cuestión social”.

La prensa del PDCH fue una tribuna precursora del periodismo obrero. Sus voceros contribuyeron eficazmente al desarrollo de la conciencia de clase al poner al descubierto la explotación y la miseria del capitalismo; contribuyó a la educación de los obreros para sus luchas, propiciando pliegos de peticiones, huelgas y acciones solidarias y a la politización obrera a través de la denuncia del fraude democrático oligárquico y del totalitarismo ideológico clerical.

El PDCH reflejó en su ideología y conducción política, las limitaciones de sus bases sociales pequeñoburguesas. Su historia combinó la crítica del sistema con la conciliación permanente buscando un espacio dentro del sistema para accionar. En sus filas se formaron valiosos cuadros obreros que fueron los forjadores del proceso de organización sindical y político de los trabajadores.

3. La clase obrera: vida y trabajo

La clase obrera chilena fue adquiriendo significación social en la segunda mitad del siglo, y se nucleó en los centros mineros del salitre, cobre, plata y carbón.

Entre los problemas que afectaban gravemente al naciente proletariado chileno, fueron la base de sus peticiones: el reclutamiento forzado de la mano de obra, los bajos salarios, los riesgos laborales y la duración de la jornada de trabajo.

Las jornadas de trabajo imperantes seguían las pautas de la época: de sol a sol o de acuerdo a las exigencias de los empresarios. El trabajo se realizaba sin la menor preocupación por lo que hoy se llama “seguridad industrial”. Se empleaba y explotaba mano de obra infantil.

Las condiciones de vida de los trabajadores reeditaron los sombríos capítulos del comienzo de la revolución industrial en Europa: vivienda estrecha e insalubre; deplorable estado sanitario responsable de una longevidad muy por debajo del promedio nacional; analfabetismo, deserción escolar; delincuencia precoz, alcoholismo, prostitución, etc.

4. Un fantasma recorre el mundo: los primeros núcleos socialistas

En 1850, se puso en circulación el Manifiesto comunista. Las distancias que por esos años separaban a Chile de Europa y la ausencia de una clase obrera propiamente tal, retardó por varios años el arribo del socialismo a sus playas.

Viajeros que pasaban por Chile y que salían al exterior, la circulación esporádica de libros y folletos sobre corrientes socialistas europeas,

inmigrantes que traían algún bagaje ideológico y tal vez correspondencia de algunos líderes obreros con sus iguales de Argentina y Europa, fueron vehículos a través de los cuales el pensamiento socialista fue enterrando sus raíces en el movimiento obrero chileno.

Entre las sociedades que retomaron los afanes de los igualitarios, se destaca por su radicalismo la Sociedad Escuela Republicana (1882); desde 1881 habrían llegado a Chile militantes internacionalistas provenientes de Montevideo; en el seno del PDCH se comenzó a hablar de socialismo con ideas que contenían algunos elementos del utopismo y anarquismo; en 1896 otro grupo demócrata se nucleó en Santiago en torno al Centro Social Obrero y nació el grupo socialista Agrupación Fraternal Obrera².

El fantasma del socialismo comenzó a quitar el sueño a la oligarquía y al clero reaccionario. La obra represiva del Estado fue completada por su aparato ideológico más eficaz de la época: la Iglesia Católica.

5. Protesta y organización obrera

En el marco de estas condiciones de vida y de trabajo surgió la protesta obrera.

En 1843 estalló en el mineral de Chañarillo la primera rebelión obrera conocida en la historia de Chile, brutalmente aplastada con el auxilio del ejército.

Al calor de la lucha, la clase obrera creó dos tipos de organizaciones:

- Las Sociedades de Resistencia: Se afirmaron a partir de 1897, con un marcado signo anarquista. Sus fuegos se dirigen contra la propiedad privada, la Iglesia y el Estado, proponen sustituir el régimen de explotación por el “comunismo anárquico”, a través de la huelga general y la acción directa de los trabajadores, sin mediación de partidos políticos.
- Las Combinaciones Mancomunales: Han sido identificadas como los primeros sindicatos propiamente tales surgidos en el país. La reunión nacional de las Mancomunales estimuló la fundación de otras organizaciones de su género en diversos lugares del país.

Hacia 1892, la conciencia de clase de los núcleos más evolucionados del proletariado arribó a la comprensión del carácter internacional de su lucha emancipadora.

La notable actividad sindical fue motivada por la decisión del gobierno de dictar una ley antiparos laborales en un esfuerzo por bajar la ascendente marea social.

² Ambos grupos integraron una nueva entidad política a fines de 1897, bajo el nombre de Unión Socialista.

6. El primero de mayo

La primera manifestación de masas destinada a conmemorar el primero de mayo fue convocada por la Unión Socialista, en ocasión del primero de mayo de 1898. En una plaza de Santiago se reunieron varios centenares de trabajadores que agitaron la consigna de las ocho horas y otras reivindicaciones laborales. El acto fue violentamente interrumpido por la policía. Una tentativa semejante se hizo al año siguiente con escasos resultados.

Fue a partir de 1890 cuando el primero de mayo se instaló definitivamente en Chile, con celebraciones en Santiago y varias ciudades del interior del país. El acto fue ganando fuerza año a año y estuvo a menudo matizado por veladas artísticas, desfiles callejeros, incidentes con la policía o grupos reaccionarios y una nutrida edición de panfletos y periódicos.

7. Las grandes huelgas del comienzo del siglo XX

En los primeros siete años del siglo XX, Chile vivió una agitación obrera sin precedente en América Latina.

Entre los motivos de los conflictos figuran demandas por aumentos de salarios, por la reducción de las jornadas laborales, contra las pulperías y las fichas-salario y el alza del costo de la vida.

Los principales conflictos registrados entre 1900 y 1907:

- La huelga de los mineros del carbón por la abolición de las pulperías en 1903;
- Huelga de ferroviarios de Antofagasta contra abusos administrativos, en 1905;
- La huelga de los trabajadores marítimos de Valparaíso que precipitó el incendio de la Compañía de Vapores y una violenta represión, en 1903;
- La Semana Roja en Santiago, el 22 de octubre de 1905, que desató la mayor convulsión social urbana conocida hasta entonces en la historia del país, que dejó un saldo de más de 300 muertos;
- El baleo en la Plaza Colón de Antofagasta, en 1906, con demandas de los trabajadores del ferrocarril por la fijación de una jornada de 8 horas;
- La masacre de la Escuela Santa María de Iquique, en 1907, donde tuvo lugar una de las matanzas de obreros más impresionantes de la historia de América Latina, tanto por el número de muertos como por el frío cálculo homicida de empresarios y autoridades públicas.

II. EL SALTO CUALITATIVO: SINDICATO Y PARTIDO (1909-1921)

1. **Recabarren: organizador, educador y propagandista**

La construcción del sindicato y del partido, como herramientas de lucha por la liberación de la clase obrera, que se verán en este capítulo, tienen como artífice a Luis Emilio Recabarren (1876-1924).

Recabarren ha sido el más fecundo organizador sindical y político de la clase obrera chilena. A su actividad se debió la fundación del Partido Obrero Socialista, en 1912, y la transformación de la Federación Obrera de Chile en una central sindical clasista en 1919.

En la esfera sindical luchó por vincular las demandas inmediatas con la comprensión de la raíz política de los problemas obreros; por una administración sindical democrática; por la unidad de los trabajadores, de la ciudad y del campo, ya fueran obreros, empleados o campesinos, creyentes o no creyentes, hombres o mujeres; por la incorporación de la mujer a la lucha política. La concepción internacionalista de la lucha obrera es parte esencial de sus enseñanzas.

- Lo que importa como constructor de los cimientos del movimiento obrero, no son sus errores y limitaciones en la teoría socialista, sino su obra concreta que creó estructuras y tradiciones que aun perduran en el movimiento obrero chileno.

2. **La FOCH: del mutualismo a la lucha de clases**

El 18 de septiembre de 1909 se constituyó en Santiago la Federación Obrera de Chile (FOCH), primera central sindical de significación nacional que habría de ser la gran escuela del sindicalismo clasista chileno.

Surgió como una entidad de carácter mutualista. El núcleo generador de la FOCH fueron los ferroviarios, luego de obtener la devolución de un descuento de salarios que el gobierno había acordado como aporte obrero para cubrir la penuria fiscal.

- El proceso de maduración ideológica en el interior de la FOCH culminó en la III Convención Nacional de 1919, cuando una posición clasista y revolucionaria sustituyó definitivamente al mutualismo, proclamando su actividad de lucha por la abolición del sistema capitalista.

El cerebro de ese vuelco histórico fue Luis Emilio Recabarren.

Para avanzar en el terreno de abierto enfrentamiento de clases, pareció necesario disponer de un instrumento político de clase. En 1920, la FOCH trató de crear un Partido del Trabajo, sumando sus fuerzas a las del Partido Obrero Socialista, el Partido Democrático de Chile. El proyecto no prosperó, pero señaló un camino que forma parte del legado de Recabarren: “la unidad política

de la clase obrera como herramienta fundamental para conquistar su liberación”.

En 1921, en la IV Convención Nacional de la FOCH, se marcó el ascenso al mayor nivel de la conciencia obrera: su militancia internacionalista, al acordarse la afiliación a la Internacional Sindical Roja.

- La politización de la FOCH tuvo por estos años su contrapeso negativo. El sectarismo de la dirigencia ató al sindicalismo de manera burocrática y rígida al Partido Comunista, en el que militaban sus cuadros. Se llegó a establecer una verdadera confusión entre las funciones, estructura y líderes de una y otra organización.

Estos errores erosionaron y desmoralizaron a sus bases aislando a la dirigencia, del conjunto de la clase. A esta decadencia contribuyó también la crisis de la dirección que sufrió por esos años el PC al precipitarse conflictos entre stalinistas y trotskistas, las pugnas con los anarquistas y la represión implacable del gobierno. En 1927 la dictadura de Ibáñez puso a la FOCH fuera de la ley, ordenando la prisión y el destierro de muchos dirigentes.

3. El POS: un partido de clase

En el interior del PDCH venía gestándose por largo tiempo un fermento ideológico de carácter socialista; la Revolución rusa de 1905 ejerció influencia en la radicalización del pensamiento obrero chileno. Recabarren y otros líderes se solidarizaron con aquel lejano trastorno social.

El 6 de junio de 1912 se fundó en Iquique el Partido Obrero Socialista. El núcleo generador estuvo formado por los más evolucionados militantes demócratas del puerto norteño.

Al nacimiento del POS le siguió, a los pocos días, la fundación de un Partido Socialista, que se integró al POS.

- En su plataforma de lucha laboral, exigió la creación de un Ministerio del Trabajo, legislación sobre la jornada de 8 horas, trabajo infantil y femenino, accidentes de trabajo, etc. En el plano de la política general, se pronunció por la separación de la Iglesia y el Estado, la instrucción gratuita, obligatoria y laica, la elección directa del presidente de la República, el fomento y protección de la industria nacional etc.

4. Los destellos de octubre: la hora de la clase obrera

Hacia el advenimiento de la Revolución rusa de octubre de 1917, el socialismo, pese a ostentar a partir de Marx una fundamentación científica, no había dejado de ser una utopía: los bolcheviques lo convirtieron en realidad.

Los destellos de ese acontecimiento iluminaron el camino del movimiento obrero chileno para el desarrollo de sus organizaciones de clase: la

transformación de la FOCH y del POS en herramientas de la Revolución socialista.

En la internacionalización del significado de la Revolución rusa para el proletariado, fue decisiva la influencia del discurso pedagógico de Recabarren:

- Al descubrir las transformaciones que el poder soviético realizaba en la economía y la cultura valoró lo medular de la revolución socialista: la formación de un hombre nuevo “que va al trabajo con un laboratorio en su cerebro”.
Con juicio certero descubrió el significado revolucionario de la política de paz que Lenin propuso al mundo sobre bases inéditas: la libre determinación de los pueblos y el fin de la guerra en las relaciones internacionales.

Los destellos de octubre iluminaron también el camino a la intelectualidad progresista que sintió su llamado para comprometer la inteligencia con el porvenir: el proletariado. Los estudiantes de la llamada generación del año 20 buscaron un lugar en la lucha obrera y pugnaron por abrir las aulas a los vientos revolucionarios.

5. La IWW: contra el capital, el gobierno y el clero.

El 24 de diciembre de 1919, se fundó la filial chilena de la Industrial Worker of the World (IWW), agrupación internacional de filiación anarco-sindicalista.

En la Convención se señaló que los enemigos de los trabajadores industriales del mundo eran: “el capital, el gobierno y el clero”, y que “contra ellos se dirigirá principalmente nuestra propaganda, así en la calle como en el taller y en nuestras propias familias”. Señaló que sus armas de lucha serán “el sabotaje, la huelga general, la huelga parcial y el label”.

La actividad de la IWW se paralizó en 1927 a consecuencia de la represión desatada contra el movimiento obrero. En años posteriores hubo intentos de revivirla sin lograr afianzarse, limitado frente al avance de socialistas y comunistas implantados en los sectores del proletariado agrupado en los establecimientos mineros de un capitalismo más desarrollado.

6. El Partido Comunista de Chile.

El IV Congreso Nacional del POS, en 1920, fue también el I Congreso del Partido Comunista de Chile.

El evento ratificó su adhesión a la III Internacional acordada por el III Congreso Nacional del POS y decidió concretarla con los siguientes acuerdos:

- 1) Constituirse en Sección Chilena de la Internacional Comunista, aceptando sus tesis y luchando por el triunfo de su causa, que es la causa de la clase proletaria.

- 2) Llamar al proletariado de todo el país, que forma el nervio de las distintas regiones: carboníferas, salitrera, minera, agrícola, industrial, etc., para que en completo acuerdo con los fines anteriormente explicados se incorpore a sus filas, y
- 3) Desenvolverse paralelamente, con perfecta inteligencia con la organización sindical revolucionaria, a fin de constituir un lazo indestructible en la lucha final contra el capitalismo.

El proceso de transformación del POS en PC estuvo jalonado de dificultades: de una parte, el país entró en un período de intensa persecución al movimiento obrero; de otra parte, la naciente organización a un período de serias dificultades internas.

En 1925 se acordó remplazar la vieja estructura heredada del POS por el modelo leninista basado en la organización celular y el centralismo democrático. Un cambio orgánico de esa magnitud no pudo realizarse sin confusiones ni conflictos.

En 1927 el V Congreso decidió iniciar la “bolchevización” del partido. La concepción leninista del partido supone un sólido acervo ideológico y moral que cubra a la organización de dos riesgos que desnaturalizan el modelo: el burocratismo autoritario que ahoga la militancia creadora de las bases y el democratismo de origen liberal-pequeñoburgués que anula la disciplina y la eficacia en la lucha convirtiendo a la organización en un cenáculo de ideólogos dedicados a la discusión permanente.

- El paso del POS al PC debió transitar un camino erizado de dificultades; esa transformación generó las conocidas enfermedades de la infancia revolucionaria: esquematismo, sectarismo, verbalismo revolucionario y subjetivismo.

La crisis de crecimiento del partido debió enfrentar otros problemas: la rígida aplicación de las políticas de la III Internacional cuyos virajes produjeron desconcierto, confusión y aislamiento.

La política de los años 28 al 33, llamada de “clase contra clase”, debió cumplirse bajo la dura represión de Ibañez frente a una realidad que ponía en el primer plano la lucha por la democracia a través de una suma de amplias fuerzas sociales contra la dictadura; se planteó la consigna del “gobierno obrero y campesino”.

La represión fue un sino que estuvo presente en los años críticos a que aludimos. En 1927 el PC fue ilegalizado. La estructura “bolchevique” era débil y apenas pudo sobrevivir a una prueba tan decisiva.

III. CRISIS OLIGÁRQUICA Y RELEVO IMPERIALISTA (1920 – 1970)

1. **Ascenso de las capas medias y trastornos políticos.**

En las últimas décadas, la expansión del aparato estatal, la ilustración de amplios sectores educados en los liceos y la promoción de profesionales universitarios, habían configurado un variado espectro de capas medias que reclamaron un lugar bajo el sol del poder oligárquico: participación política y elevación de niveles de vida.

Por otra parte, el movimiento obrero, que disponía de una central sindical, la FOCH, de una dirección política, el POS, intensificaba su lucha bajo los apremios de sus necesidades vitales y el clima revolucionario de la época.

- En 1919, tras una larga lucha del magisterio y de las organizaciones obreras, se aprobó la Ley de enseñanza primaria obligatoria, que representó una clara victoria democrática y popular.

La “cuestión social” conmovió profundamente al estudiantado universitario. La efervescencia social movilizó a los empleados del comercio, a los grupos de profesionales y hasta hubo brotes de rebeldía en el campo.

- De 1911 a 1920, la clase obrera, encabezada por la FOCH y el POS, se movilizó intensamente. En ese período se contabilizaron 193 paros en apoyo de demandas económicas y sociales. Algunos de estos movimientos figuran entre las grandes batallas de la clase obrera chilena, ya sea por las conquistas que impusieron o por la violencia descargada por gobernantes y empresarios.

Las elecciones presidenciales se realizaron el 25 de junio: Arturo Alessandri Palma, de la Alianza Liberal³ ganó a Luis Barros Borgoño, de la Unión Nacional⁴, en un clima de extrema tensión política.

En 1924 el Congreso aprobó una ley para aumentar los sueldos a diputados y senadores. El hecho justificó la intervención del ejército: el pronunciamiento del 5 de septiembre de 1924.

El ejército virtualmente obligó al Congreso Nacional a aprobar 16 proyectos de leyes destinados a introducir reformas sociales: impuesto a la renta, contrato de trabajo, accidentes del trabajo, seguro obrero, organización sindical, tribunales de conciliación y arbitraje, sociedades cooperativas, caja de empleados particulares, etc.

Asumió el gobierno una junta militar que disolvió el Congreso y aceptó la renuncia al presidente. El gobierno militar no pudo escapar a las tensiones que dividían a las fuerzas políticas en conflicto y reflejó esas contradicciones. Se

³ Sector liberal, radicales y democráticos.

⁴ Conservadores, sector liberal y nacionales.

precipitó a un nuevo pronunciamiento: el 23 de enero, Alessandri fue llamado a reasumir su mandato.

Alessandri impuso una nueva Constitución política de signo liberal que afianzó la autoridad del presidente elegido por votación directa, separó la Iglesia del Estado, garantizó las libertades públicas y amplió los derechos ciudadanos y creó un Banco Central para que el Estado controlara la política monetaria. No obstante ese progresismo, no vaciló en reprimir a sangre y fuego a los mineros del salitre que durante los primeros meses de 1925, se movilizaron en demanda de sus derechos. Se decretó Estado de sitio en las provincias del norte y se desató una cacería de dirigentes y asalto de locales.

2. El Partido Socialista de Chile

En junio de 1932, una sublevación militar vinculada a un Comité Revolucionario de inspiración socialista, exigió la renuncia del presidente.

Se inauguró la “República Socialista”: El audaz proyecto revolucionario no pudo sostenerse más que doce días en el poder. Un sector reaccionario del ejército retornó las cosas a su “normalidad”, mientras sus líderes fueron encarcelados.

En abril de 1933, diversos grupos que formaron parte del Comité Revolucionario concurrieron a la fundación del Partido Socialista. El nuevo partido surgió en un período de crisis de la dominación oligárquica que impulsó a la lucha social a vastos sectores medios y estimuló la recuperación del movimiento obrero, torrente que se canalizó a través de su representación política. Así, el PC se caracterizó, desde sus orígenes, por su carácter obrero y popular.

- En estas circunstancias históricas debe buscarse la diferencia con el Partido Comunista. Esta organización obrera, nacida de la movilización proletaria minera y debido a determinadas circunstancias históricas, políticas e ideológica, no fue capaz de proyectar un programa de salida socialista a otros grupos sociales no obreros e incluso dejó un gran vacío de conducción dentro de la clase obrera. El Partido Socialista pasó a llenar tales espacios y a impulsar un nuevo estilo de conducción del movimiento de masas, ajeno a la rigidez y burocratismo que caracterizan al PC de la época. Se generó así una contradicción, entre un PS obrero y popular, con fuerte arraigo entre distintos grupos y clases dominadas, con un estilo de conducción más abierto, y un PC básicamente obrero, que descansa en su alta capacidad de organización y disciplina interna, con estilos que tienden a la rigidez y el burocratismo. Esta contradicción no ha desaparecido y explica el hecho único en el mundo, de la existencia de dos partidos de base obrera y consecuentemente revolucionarios.

El PS postuló una concepción internacionalista de la lucha revolucionaria, con énfasis en la solidaridad latinoamericana; en la esfera internacional optó

por una total autonomía respecto de la Internacional, rechazando la orientación socialdemócrata por su carácter reformista y la orientación estalinista de rígida dependencia a un centro mundial de decisiones revolucionarias.

Sin embargo, desde sus inicios, el PS mostró ciertas características negativas que conspiraron contra su eficacia revolucionaria: la heterogeneidad ideológica y el predominio pequeñoburgués en sus esferas dirigentes configuraron cierto “estilo socialista” caracterizado por el fraccionalismo y el personalismo amparados en los marcos de una “democracia interna” de corte más liberal que revolucionaria. Fruto de esas características fueron las sucesivas escisiones que comenzaron en 1937.

3. Hacia el Frente Popular

En octubre de 1932 Arturo Alessandri regresó al poder. Su gobierno (1932-1933) se caracterizó por su signo reaccionario y autoritario: solicitó y obtuvo del Congreso Nacional facultades extraordinarias con las cuales persiguió duramente a los trabajadores.

Comunistas y socialistas tomaron en sus manos la organización de los campesinos: en 1937 se creó la Federación Nacional Agraria (PC) y en 1935 la Liga de Campesinos Pobres (PS).

El PS convocó en 1934 a la formación de un Block de la Izquierdas, integrado por socialistas, radicales-socialistas, democráticos y la izquierda comunista (trotskista). En 1935 el bloque emitió un manifiesto que denunció la política antinacional, reaccionaria y represiva de Alessandri. La fuerza dirigente del bloque era sin duda el PS, en vertiginosa penetración en las masas.

El 24 de diciembre se reunificó el movimiento sindical con la fundación de la Confederación de Trabajadores de Chile (CTCH).

En marzo de 1936 se suscribió el pacto del Frente Popular por radicales, democráticos, socialistas y comunistas. La CTCH se incorporó al Frente Popular y tuvo representación en el Comité Ejecutivo Nacional.

En las elecciones presidenciales de 1933 salió electo Pedro Aguirre Cerda, por el Frente Popular, con estrecho margen.

La exigua ventaja del candidato frentista alentó en los círculos más reaccionarios la intención de cerrarle el paso al gobierno con un golpe militar. Las maniobras golpistas no pudieron concertarse; entonces, la derecha puso en marcha otra carta: la infiltración y captura del gobierno por dentro.

La incapacidad transformadora del Frente Popular se puede apreciar más nítidamente en dos aspectos clave de la problemática estructural del país:

- La cuestión agraria: la propiedad latifundista no fue tocada, ni removidas las trabas que impedían la sindicalización campesina.

- La explotación imperialista: el imperialismo “democrático” tampoco fue tocado.

El Frente Popular no significó una ruptura del orden oligárquico sino más bien su modernización y ensanchamiento de su base social al cooptar a amplios sectores medios que asumieron importantes funciones delegadas en el manejo del Estado.

En 1946 el conflicto llegó a su clímax. La CTCH se dividió y cada tendencia política se quedó con un trozo del movimiento sindical, ambos debilitados y desacreditados ante los trabajadores.

Ese mismo año fue elegido presidente de la República, Gabriel González Videla, radical que contó con el apoyo comunista sobre la base de un programa de tipo frente-populista.

El gobierno de González Videla acabó de cuajo con las ilusiones sobre las posibilidades de esta alianza política como una fuerza capaz de acometer transformaciones reales al orden oligárquico. Atrapado en los dilemas de la “guerra fría” optó decididamente por su servicio al imperialismo y la represión a los trabajadores.

En el marco del Tratado de Asistencia Recíproca de Río de Janeiro de 1947, se suscribió en 1951 un Pacto de Ayuda Militar y dentro del “espíritu” de la Carta de la Organización de los Estados Americanos que dio vida a la OEA en 1948, el país se alineó en la cruzada continental contra el comunismo.

Se dictó en 1948 la Ley de defensa de la democracia, que proscribió al PC de la vida pública y a cuyo amparo se prosiguió al conjunto del movimiento obrero.

A pesar de que el gobierno continuó la política de industrialización, sus ligazones con los sectores políticos defensores del latifundio lo mantuvieron alejado de toda innovación agraria y, desde luego, de todo cambio en la estructura de la dominación imperialista.

4. Crisis y recuperación del movimiento popular: la CUT

La imagen reaccionaria y corrompida del gobierno debilitó su accionar represivo y comenzó a sentirse un creciente descontento popular que no encontró a mano los cauces tradicionales para expresarse: la lucha reivindicativa en la esfera sindical y la presión de los partidos de la izquierda.

Ese vacío fue llenado en una primera etapa de la recuperación popular por la Federación de Estudiantes de Chile (FECH).

Al iniciarse 1950, un gabinete llamado de “sensibilidad social” sustituyó al anterior de signo conservador. Efectivamente se dio satisfacción a importantes reivindicaciones laborales y se otorgó amnistía política.

- El 1 de mayo de 1952, ante un mitín de trabajadores, se informó la puesta en marcha de la Comisión de Unidad Sindical, cuyo objetivo era la creación de una Central Única de Trabajadores de Chile.

Con la firme decisión de dar un gran salto adelante, orgánico e ideológico en el movimiento sindical chileno, se arribó a la celebración del Congreso Constituyente de la Central Única de Trabajadores de Chile.

Los principios rectores de la nueva central se pueden sintetizar en los párrafos siguientes:

- “Que el régimen capitalista actual, fundado en la propiedad privada de la tierra, de los instrumentos y medios de producción y en la explotación del hombre por el hombre, que dividen a la sociedad en clases antagónicas explotados y explotadores, debe ser sustituido por un régimen económico-social que liquide la propiedad privada hasta llegar a la sociedad sin clases, en la que se aseguran al hombre y a la humanidad su pleno desarrollo”.
- “La Central Única de Trabajadores tiene como finalidad primordial la organización de todos los trabajadores de la ciudad y del campo, sin distinción de credos políticos o religiosos, de nacionalidad, color, sexo o edad para la lucha contra la explotación del hombre por el hombre, hasta llegar al socialismo integral”.

En el campo de las relaciones internacionales, se estableció la independencia de la CUT respecto de los grandes centros del sindicalismo, sin perjuicio de relaciones fraternales con todos los sectores.

La CUT se puso a la vanguardia de la lucha del conjunto del movimiento popular impulsando reivindicaciones laborales y políticas; la vigencia de la Ley de defensa de la democracia había dañado seriamente la vida sindical.

La CUT dio una atención destacada a sus preocupaciones internacionales: apoyo resuelto y permanente a las luchas revolucionarias de Cuba y Vietnam; demandó el establecimiento de relaciones con los países socialistas y patrocinó en 1964 la fundación del Congreso Permanente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América Latina (CPUSTAL) que agrupa al sindicalismo clasista de la región.

La reanimación del movimiento sindical se relaciona dialécticamente con el proceso de acercamiento de los partidos populares, en especial del PS y PC.

1946 fue el año que marcó la mayor crisis de la historia del socialismo chileno. A partir de 1947 se inició un proceso de recuperación en el que fueron actores fundamentales generaciones jóvenes: este sector fue la base sobre la cual se reconstruyó el partido, que tomó el nombre de Partido Socialista Popular.

Desde 1952, el PC había impulsado la formación del Frente del Pueblo, junto a la fracción socialista denominada “de Chile” y a otros grupos de izquierda. Esas fuerzas, el PSP y restos del Partido Democrático, formaron un bloque unitario llamado Frente de Acción Popular, el 29 de febrero de 1956, definido como un núcleo aglutinador de las fuerzas que estén dispuestas a luchar por un programa antiimperialista, antioligárquico y antifeudal.

- En julio de 1957, los socialistas se unificaron bajo un cuadro formado en las filas del PSP. La recuperación socialista entró en un sostenido ascenso.
- En 1958 el PC recuperó su plena legalidad. Irrumpió con gran energía en la vida pública dando pruebas contundentes de un cambio radical en su comportamiento político. Las enfermedades de la infancia fueron superadas, la autocrítica precipitada por el XX Congreso del PCUS favoreció su inserción en la política nacional y vinculación con el conjunto de las fuerzas progresistas del país.

Las elecciones presidenciales de 1958 situaron al FRAP a escaso margen de la conquista del gobierno, la que estuvo a manos de Jorge Alessandri:

- Los resultados electorales convirtieron al FRAP en una real alternativa de poder que recompuso todo el cuadro político tradicional.
- ❖ La lucha de clases se exacerbó a un nivel sin precedentes desafiando abiertamente la hegemonía oligárquica. Esta marea social recibió desde la Cuba revolucionaria una notoria influencia.

5. El fracaso del reformismo

El gobierno del conservador Alessandri (1958-1964) significó la recuperación directa del manejo del gobierno por la oligarquía. La administración de Alessandri, conocida como la gestión de los gerentes en el poder, agudizó las contradicciones de clase en un período en el que los sucesos de Cuba crearon en América Latina una intensa agitación social. Su régimen debió enfrentar a un movimiento obrero en impetuoso ascenso y a una fracción burguesa-populista alentada por la estrategia reformista de la Alianza para el Progreso. El FRAP y la CUT, solidarios con la Revolución cubana, plantearon abiertamente su proyecto revolucionario hacia el socialismo. El PCD ofreció una solución “revolucionaria”, alternativa “en libertad”, fundada en su convicción de que en Chile “todo tiene que cambiar”.

Hacia 1964 la dominación imperialista se había extendido a variadas esferas de las actividades productivas y de servicios, ampliando sustancialmente sus inversiones en la industria y el comercio.

Las crecientes posibilidades electorales de Allende provocaron un verdadero pánico en el conjunto de las clases dominantes, que terminaron votando masivamente por Eduardo Frei: con dinero y asesoría imperialista se

orquestó una impresionante campaña de terror destinada a amedrentar al electorado con el espectro de una “tiranía comunista” si se votaba por Allende.

- La “revolución en libertad” se puso en marcha, decidida a darle algo a los pobres para salvar a los ricos...

Hacia 1970, la dominación imperialista controlaba el 71% del capital de las sociedades anónimas industriales, bancarias y comerciales instaladas en el país.

Ninguno de los problemas vitales del país fue resuelto, obligando a los trabajadores a intensificar sus combates reivindicativos. Sumido en el estancamiento económico y la insatisfacción social, el régimen de Frei debió recurrir al viejo expediente reaccionario para “conservar el orden”: reprimir.

- Fracasado el experimento reformista, el sector más avanzado del PDC señaló la necesidad de buscar una vía no capitalista de desarrollo para lo cual buscó “la unidad de todo el pueblo” en vísperas de la elección presidencial de 1970. La historia había demostrado que el neocapitalismo no era una solución para los problemas de la sociedad chilena; quedaba por jugarse la opción socialista.

6. Los campesinos en escena

El movimiento campesino, que venía articulándose desde los años 30, tropezó con serias dificultades para desarrollarse. El Frente Popular no fue capaz de crear las condiciones legales para la sindicalización campesina.

La represión desatada sobre el conjunto del movimiento popular a partir de la promulgación de la Ley de defensa de la democracia en 1948, asestó un duro golpe al incipiente movimiento campesino: se frenó su organización y el proselitismo de los partidos de izquierda fue prácticamente paralizado. Sólo la Iglesia Católica pudo realizar algún trabajo “educativo” en el campo.

A partir de los años 50 se produjo una progresiva reanimación del movimiento campesino, favorecido por dos hechos políticos decisivos:

- En 1958 fue derogada la Ley de defensa de la democracia, con lo cual se quitó la principal traba al activismo político en el campo y se reformó la Ley electoral estableciendo la cédula única y el mecanismo de seguridad para la libre expresión de la voluntad ciudadana. La conocida presión de los señores de la tierra sobre los electores campesinos sufrió un golpe mortal.
- En 1952 la Iglesia Católica creó la Acción Católica Rural destinada a promover “el desarrollo comunitario” con plena tolerancia patronal. No obstante las características de estos organismos y programas, su labor contribuyó eficazmente a poner en movimiento al campesinado.

En 1961 la actividad de izquierda en el campo marcó un hito significativo al constituirse, con el patrocinio de la CUT y del FRAP, la Federación Campesina e Indígena, por la fusión de diversas organizaciones creadas por socialistas y comunistas.

Los años 60 fueron cruciales para el despertar campesino. Bajo el impacto de la Revolución cubana iniciada en 1959, se planteó la réplica de la Alianza para el Progreso, dirigida a la neutralización del campesinado a través de reformas agrarias modernizantes.

Las elecciones presidenciales de 1964 concentraron una actividad política sin precedentes en el campo. La cuestión agraria fue tema focal de la campaña junto a la política del cobre.

- En 1967 se dictó la Ley de reforma agraria y una nueva Ley de sindicalización campesina que abrió anchas compuertas para la organización y la lucha social del sector más postergado de la sociedad chilena. Se estableció la creación de sindicatos comunales y no por predios, con un mínimo de 100 campesinos; estos sindicatos comunales se integraron a federaciones provinciales y éstas a confederaciones nacionales.

Las principales confederaciones reflejaban la gravitación en el campo de las dos fuerzas políticas que enfrentaban a la vieja estructura agraria y que promovían la organización y lucha campesina: la Confederación Triunfo Campesino, controlada por el PDC y la Confederación Ranquil (ex Federación Campesina e Indígena) controlada por el FRAP.

Hacia 1970 la presencia campesina en la lucha social y política del país es definitiva. Ese despertar reflejó la profundidad de los cambios operados en la estructura de la propiedad y en la crisis de dominación ideológica de una oligarquía acorralada por su fracción modernizante y la enérgica lucha del movimiento obrero, que a través de sus alas sindicales, CUT y política, FRAP, terminaron por soldar la alianza obrero-campesina dentro de su estrategia revolucionaria.

IV. REVOLUCIÓN Y CONTRARREVOLUCIÓN (1970-1978)

1. La Unidad Popular: 1970-1973

a) Las fuerzas convergentes y el programa básico de la Unidad Popular.

El núcleo generador de la Unidad Popular fue el concierto de los partidos socialista y comunista, de antigua y sólida implantación en las masas laborales del país. El entendimiento de estos partidos debió atravesar un largo y laborioso proceso para superar los bochornosos enfrentamientos del pasado y serias diferencias de orden táctico y estratégico sobre el carácter y vías de la revolución chilena.

A mediados de 1969 las direcciones de los partidos Socialista y Comunista enviaron una carta pública a los partidos Radical, Social-Demócrata, Acción Popular Independiente y MAPU, invitándolos a establecer una alianza con miras a la elección presidencial de 1970 y ofrecer al país una alternativa política de carácter “nacional, popular y revolucionaria”. El llamado fue bien acogido y pronto la alianza estuvo estructurada en torno a tres documentos centrales: el Pacto de la Unidad Popular, El Programa básico de gobierno de la Unidad Popular y el Acuerdo sobre la conducción y estilo de la campaña.

La nueva alianza representó un avance cuantitativo y cualitativo en el desarrollo del movimiento popular chileno. Cuantitativo porque significaba atraer importantes contingentes sociales, expresión de capas medias (radicales y cristianas) y cualitativo porque se hacía en torno al eje proletariado socialista-comunista, con el objetivo explícito de “iniciar la construcción del socialismo en Chile”.

La victoria de la Unidad Popular por Salvador Allende, fue la culminación de una larga marcha que reconocía sus orígenes en las primeras rebeliones obreras del siglo XX.

- El 3 de noviembre Salvador Allende asumió el gobierno y se abrió en Chile el período de mayor exacerbación de la lucha de clases de su historia.

La obra constructiva del gobierno popular en sus mil días de existencia, realizada en medio de toda suerte de dificultades, mostró nítidamente la capacidad creadora de los trabajadores chilenos y la identidad de su proyecto político con los auténticos intereses nacionales. Nunca Chile tuvo un gobierno más nacional, más democrático, más popular, más decidido a conquistar su plena soberanía económica, política y cultural y a implantar la solidaridad como la norma rectora del orden social.

El proceso transformador debió pronto enfrentarse a la reacción airada de los grupos afectados por los cambios cuyo carácter revolucionario inauguraba definitivamente una nueva época en la política chilena.

Los errores de conducción general del proceso favorecieron la articulación de una amplio frente opositor que teniendo por centro la alianza PN-PDC, cubrió sectores que iban desde la gran burguesía y las capas medias hasta los obreros y campesinos más retrasados ideológicamente. Con la asistencia financiera y técnica de la CIA y otras agencias imperialistas, la oposición preparó y realizó el 11 de septiembre la contrarrevolución.

- El golpe militar del 11 de septiembre de 1973 tiene un significado de clase categórico: es un alzamiento contrarrevolucionario fraguado por los grandes intereses económicos y geopolíticos afectados por un proceso que marchaba velozmente a transformar de raíz el orden imperante. El apoyo de los sectores medios y aun de trabajadores que los facciosos concitaban para su proyecto, no puede ocultar su verdadero significado de clase; por lo demás, a pocas semanas del

golpe, este rasgo esencial fue visible para todos cuando se puso en marcha el modelo económico y las formas institucionales de gobernar.

b) *Los sindicatos y el gobierno popular.*

En diciembre de 1970 se suscribió un convenio CUT-gobierno, donde se recogían viejos anhelos de la CUT, como obtener su reconocimiento legal y reivindicaciones urgentes planteadas por la crisis económica que había deteriorado seriamente los ingresos de los trabajadores.

En 1971 la CUT y el gobierno dieron forma a otro acuerdo trascendental: la participación de los trabajadores en la gestión económica. Se establecieron mecanismos para dar presencia a los trabajadores en diversas instancias de la gestión empresarial a través de representantes especialmente elegidos para esa función conservándose independientes las estructuras sindicales.

- La participación no resolvió ninguno de los problemas cardinales del proceso: acentuar el control laboral sobre las empresas, elevar la conciencia política de los trabajadores, mejorar la eficiencia administrativa, aumentar la producción, etc.

Las disputas por las esferas de participación, la confusión de objetivos y procedimientos, fueron convirtiendo la participación en sinónimo de anarquía administrativa, caída de la producción y asambleísmo permanente.

La aparición de “cordones industriales” y de otras formas de “poder popular”, expresaba una gran movilización en la base sindical; su sola aparición puso en evidencia que las estructuras tradicionales de la CUT no respondían a las nuevas exigencias de la participación popular. En realidad, el “poder popular” operó como un producto ideológico de la pequeña burguesía dirigente, que se hizo sentir más como elemento de advertencia en el campo de la burguesía que como elemento movilizador para la clase obrera y sus aliados.

c) *La vía chilena al socialismo:*

La única vía viable en un sistema político caracterizado por su estabilidad, legitimidad y flexibilidad, era acceder al gobierno ganando la elección presidencial y construir un nuevo estado a partir del estado burgués.

En la primera fase del proceso la vía chilena pudo recorrer exitosamente un largo trecho utilizando la cuota de poder estatal conquistada, pero sufrió un “bloqueo”, proveniente no de la sustancia burguesa de las instituciones, sino sobre todo de la correlación de fuerzas políticas y sociales que la Unidad Popular no fue capaz de poner a su favor.

Entre las opciones que se le presentaban a la fuerzas populares estaba la de profundizar la división existente en el seno de la burguesía. El temor de que una alianza con una fracción de la burguesía representara un retroceso impidió a la dirección de la Unidad Popular evaluar la ventaja de una alianza que proporcionara el tiempo necesario para afianzarse en el control de los aparatos

de poder. No puede ignorarse la circunstancia de que los partidos populares llegaban sin la suficiente cantidad de cuadros capacitados para hacer una utilización adecuada de los recursos institucionales disponibles.

- La Unidad Popular no supo evaluar que la división en el campo burgués no podría ser sino transitoria, un último destello de la polarización creada por la lucha electoral.

La ausencia de una comprensión justa de esta situación fue causa inicial del empantanamiento de la “vía chilena”.

Los errores de la política económica donde el voluntarismo y la irresponsabilidad campearon bajo la envoltura de la fraseología revolucionaria tan deslumbrante como ineficaz para aislar al enemigo principal, condujo exactamente al resultado opuesto. El gobierno popular se convirtió en el enemigo contra el cual se articuló un “frente amplio” de todos los que se sintieron amenazados por expropiaciones y tomas de empresas y predios de todos los tamaños.

La ausencia de una política militar ha sido señalada como una de las más serias insuficiencias de la conducción política de la Unidad Popular. El desenlace conocido proviene más de la ausencia de una política militar de la Unidad Popular que de una fatalidad incontrollable.

Esta política militar, debería haber contenido:

- a) La modificación de la composición de los cuadros militares, con el criterio de maximizar el peso y la influencia de los elementos más leales al sistema político democrático formal, y a minimizar la influencia de los cuadros presuntamente leales hacia los valores sociales conservadores que subyacen en toda institución militar.
- b) La creación y el desarrollo de una nueva legitimidad revolucionaria que hubiera servido de fundamento ideológico y político para una redefinición del papel de las fuerzas armadas en la sociedad.
- c) La creación de un conjunto de nexos, de vínculos entre las fuerzas armadas y las iniciativas gubernativas, y las organizaciones populares, tendiente a ligar la existencia concreta de los efectivos militares al quehacer nacional, del que se encontraban separados.
- d) El dictado de leyes o instituciones dirigidas a alterar el régimen legal y orgánico de las fuerzas armadas de modo de dificultar la subversión y de favorecer el desarrollo de nuevos elementos progresivos en su organización y régimen legal.
- e) La creación y el desarrollo paulatino, dentro de los marcos permitidos por el sistema político vigente, de una organización de las fuerzas populares de carácter paramilitar, susceptibles de ser utilizadas eficazmente en condiciones de un enfrentamiento social.

f) La existencia, dentro de la estructura del poder del gobierno de la Unidad Popular, de un verdadero estado mayor que debió haber tomado bajo su responsabilidad el tratamiento e implementación de este gran proyecto militar.

- El fracaso de la vía chilena pagó así un caro tributo a la escasa elaboración teórica de su dirigencia, cuyos inestimables méritos en otros planos no fueron suficientes para escapar a la sentencia leninista: “sin teoría revolucionaria no hay acción revolucionaria”.

d) *Salvador Allende*:

La figura central de la Unidad Popular ha sido Salvador Allende (1908-1973), primero, el más tenaz forjador de la unidad, luego, el conductor que se entregó por entero a la tarea de realizar el Programa prometido al pueblo y finalmente, el héroe que cayó combatiendo contra los militares alzados.

Su lucha no se encaminó a humanizar ni a modernizar el capitalismo en la perspectiva estratégica de la social-democracia; Allende luchó sin renuncios para abatir las estructuras del capitalismo dependiente, por llevar a los trabajadores al poder y construir una sociedad sin clases. Fue un revolucionario que militó en el proyecto histórico del proletariado en su doble dimensión: nacional e internacional.

2. La junta militar y los sindicatos

a) Los sindicatos en la mira del golpe:

Para justificar el alzamiento contra el gobierno constitucional, los generales sublevados declararon la ilegitimidad del régimen popular que habría quebrantado las garantías fundamentales consagradas por el Estado de Derecho: libertades de expresión, educación, petición y huelga. Se acusó al gobierno popular de coartar derechos ciudadanos directamente vinculados con la organización sindical y se formularon proezas como las de hacer efectiva la participación de los trabajadores en la gestión empresarial.

Pero todo no era más que papel mojado destinado a justificar el asalto al poder y a confundir a la principal base de sustentación del gobierno popular: los trabajadores.

Pronto se desencadenó una brutal escalada represiva. Quedaron suspendidas las actividades sindicales que permitían a los dirigentes percibir remuneración de las empresas sin trabajar en realmente en ellas; se abolió la estabilidad; se redujo el personal de la administración pública en un 50%; se fijaron nuevas causales para autorizar despidos.

El 28 de marzo de 1976, el Ministerio del Trabajo dio una definición de la huelga: “La Huelga es una forma de presión usada como instrumento de la lucha de clases, por lo tanto debe ser cancelada”.

b) Política laboral y modelo económico:

La política laboral puesta en marcha y que se amplió con nuevas disposiciones restrictivas, fue el instrumento necesario para la aplicación del modelo económico del fascismo orientado a establecer un nuevo patrón de acumulación privilegiando a la empresa privada.

- A los bajos salarios y desocupación, habrá que sumar la disminución del gasto público en salud, vivienda y educación. Se llevó a cabo un plan para el “fomento del empleo”, que proponía la reducción del costo de mano de obra y una mayor movilidad en el mercado de trabajo. Para estos propósitos se permitió contratar por debajo del salario mínimo a menores de 23 años y mayores de 65 años, congelar el salario mínimo, liquidar el plan del empleo mínimo y las disposiciones legales sobre inamovilidad.

Cuatro han sido los instrumentos legales aplicados en el campo laboral:

I. El estatuto social de la empresa: cuerpo legal destinado a “integrar” a los trabajadores a la empresa a través de mecanismos formales que niegan en realidad toda injerencia laboral en las decisiones de la gestión empresarial.

II. El estatuto de capacitación del empleo: radica en la empresa el derecho de capacitación a los trabajadores y en el Estado el control general de dicha actividad marginando de toda injerencia a los trabajadores.

III. Estatutos fundamentales de principios y bases del sistema de seguridad social: se establecen, entre otras cosas, la jubilación por edad y no por años de servicio y la colocación de los fondos previsionales en el mercado de capitales bajo la responsabilidad de empresas privadas.

IV. Proyecto de reformas al Código del trabajo: se pone fin a la estabilidad en el empleo; se establecen nuevas causales de despido; las indemnizaciones se tornan aleatorias; se limita el fuero de que gozaban los dirigentes sindicales y se retorna a la explotación del trabajo infantil.

Como complemento de esta política laboral, se han creado instrumentos de control sindical:

I. La Secretaría de Gremios (1975): definida como “vehículo entre los gobernantes, los trabajadores y empresarios”.

II. Las escuelas sindicales (1974): encargadas de generar un “nuevo liderazgo sindical sin los vicios políticos del pasado”

III. Estructuras sindicales oficialistas (1976): creación de un Frente Laboral de Unidad Nacional, inspirado en la ideología oficialista.

- El modelo económico no sólo ha deteriorado gravemente la situación social de los trabajadores en general y en particular de la clase obrera, sino que también ha producido un notable achicamiento del proletariado como clase, reduciendo su peso específico en el seno de la sociedad con las consiguientes implicaciones políticas.

c) Recuperación del sindicalismo democrático:

Pese a la brutal represión sobre las organizaciones sindicales, se ha ido configurando una paulatina recuperación del sindicalismo democrático, por las siguientes causas:

- La amplia y sostenida solidaridad del sindicalismo mundial. El movimiento sindical mundial, en sus tres grandes corrientes, Federación Sindical Mundial, Confederación Internacional de los Sindicatos y la Confederación Mundial del Trabajo, han brindado a los sindicatos chilenos una permanente solidaridad.
- La tradición clasista sindical chilena se convirtió en un muro infranqueable para los proyectos oficialistas destinados a someter a las organizaciones laborales.
- La supervivencia y recuperación de los partidos obreros frente a la fuerza desatada en su contra para “extirparlos” de la vida nacional, que ha permitido la elevación cualitativa de las demandas sindicales.
- La postura de la Iglesia Católica en defensa de los derechos sindicales.

Desde dos vertientes históricas han emergido las estructuras sindicales que protagonizan esta reanimación: el sindicalismo de filiación demócrata-cristiana y el de filiación socialista-comunista.

3. La junta militar y los partidos populares

a) La difícil recuperación de los partidos populares:

Para los partidos populares, el golpe significó concretamente la desarticulación de sus estructuras que vivían la inercia de una democracia política y que los privó de una disposición orgánica, ideológica y psicológica para enfrentar el vendaval: fueron virtualmente paralizados y aniquilados.

No fue fácil a los partidos populares recuperar un mínimo de organización para volver a cumplir su papel dirigente del movimiento popular. Las primeras tentativas de reestructuración cobraron nuevos costos humanos en 1975.

Desde aquella fecha, luego de un duro aprendizaje, los socialistas han venido fortaleciendo progresivamente su organización y ampliando su actividad.

La recuperación del PS en el exilio ha tropezado paradójicamente con mayores dificultades. La composición predominantemente pequeñoburguesa y de incorporación reciente al partido favoreció el diversionismo ideológico y la anarquía orgánica. Se ha reafirmado la vigencia histórica y la identidad ideológica del socialismo chileno, como un partido nacional de la clase obrera, popular, democrático y autónomo decidido a mantener y a reforzar la Unidad Popular como herramienta básica en la lucha por la democracia y el socialismo.

El Partido Comunista, tradicionalmente más orgánico que el PS, no pudo escapar a las tenazas de los aparatos represivos de la dictadura.

La resurrección del Partido Radical ha sido también difícil. En 1975 estuvo ya en condiciones de constituir una Dirección Única, que comprende los equipos dirigentes del interior y del exterior, para enfrentar la emergencia.

En 1978, la Izquierda Cristiana culminó una laboriosa faena de reconstrucción al realizar, con participación de todas sus comunidades del interior y el exterior su primer Congreso Nacional después del golpe militar. El torneo reafirmó su compromiso con la lucha por el socialismo en Chile y aseguró su presencia en los diversos frentes de la resistencia.

b) Una propuesta socialista para Chile:

Los partidos populares han reafirmado su convicción que sólo el socialismo podrá liberar a Chile de la explotación imperialista que le impide realizar su proyecto nacional. Esa reafirmación estratégica plantea, sin embargo, algunos problemas teóricos y políticos cuya discusión recién comienza: las relaciones entre socialismo y democracia y entre marxismo y cristianismo, la inserción del proyecto socialista en la continuidad histórica de la nación.

Pero hay una condición perentoria para darle viabilidad política a la llamada propuesta socialista para Chile: la profunda y honesta autocrítica del período del gobierno de la Unidad Popular.

- Para la izquierda este asunto no sólo es conveniente sino indispensable: la etapa final del gobierno del presidente Allende, tanto por los errores cometidos por la Unidad Popular como, sobre todo, por las dificultades que provocaron las campañas de sabotaje y el bloqueo norteamericano dejaron en sectores muy amplios del país una imagen de desorganización e ineficiencia que sólo se puede borrar con una seria autocrítica y el planteamiento de una nueva alternativa para Chile.

V. CONCLUSIONES

1. El movimiento chileno es uno de los más antiguos y desarrollados en sus esferas sindical y política de América Latina en las que ha logrado crear estructuras unitarias, como la Central Única de Trabajadores y la Unidad Popular, dotadas de un programa orientado a la sustitución del capitalismo y a la implantación del socialismo.

2. Su núcleo dinamizador ha sido el proletariado minero.

3. La lucha obrera representó una fuerza decisiva en el desplazamiento del control oligárquico del poder a favor del centro político que estableció un nuevo orden institucional en el que el movimiento obrero conquistó, con altibajos, un espacio para su participación a través del sindicalismo legal y de la acción parlamentaria de los partidos populares hasta llegar a desafiar el establecimiento capitalista ganando una elección presidencial en 1970.

4. La vía chilena al socialismo representó la prueba de fuego de un proyecto revolucionario fundado en una lucha de clases institucionalizada y de cuyos cauces la dirigencia del proceso revolucionario no fue capaz de liberarse para enfrentar la contrarrevolución.

5. El movimiento obrero, sindical y político, luego de sufrir un profundo reflujó, a consecuencia del golpe militar de 1973, se ha recuperado y asume posiciones de vanguardia en la lucha antifascista y se plantea la necesidad de reformular un proyecto de liberación nacional y social que supere los errores y las insuficiencias del pasado.

➤ SINDICATOS Y FUERZAS POLÍTICAS EN LA ARGENTINA PREPERONISTA (1930-1943)

ISIDORO CHERESKY

INTRODUCCIÓN

Hacia 1945 se constituye en la Argentina el peronismo. Éste es un movimiento social y político popular cuyo sustento principal son los asalariados urbanos; pero la estructura del movimiento está integrada en sus orígenes por una coalición entre militares, funcionarios de Estado, sindicalistas y en menor medida algunos políticos tradicionales. El por entonces coronel Perón encarna un liderazgo conquistado a partir del intento de dotar de una política social al gobierno de facto emergido del golpe de Estado del 4 de junio de 1943.

En 1945 el sindicalismo estaba profundamente dividido. El vasto sector de dirigentes sensibilizados por la política social de Perón y que habían encontrado en la alianza con la Secretaría de Trabajo y Previsión una perspectiva que conduciría a los patronos al reconocimiento de los sindicatos y a la negociación, no era insensible a la campaña contra el gobierno militar y contra Perón en nombre de la reconquista de la democracia.

En ese mes de octubre, cuando el curso de los acontecimientos políticos parecía definido, un elemento inhabitual lo altera sustancialmente: el 17 de octubre de 1945 simboliza el “ingreso de las masas populares” en la escena política. En esa fecha una huelga general no programada por las organizaciones sindicales, y las manifestaciones callejeras que desembocan en una gran concentración en la Plaza de Mayo, unidas a la acción de sectores del aparato de Estado, logran desbaratar el contragolpe de Estado y de ese modo liberar a Perón. Pocos días después un conjunto de líderes sindicales fundan el Partido Laborista tomando como modelo su homólogo británico; ese partido será la vértebra de la alianza política que permitirá el triunfo de Perón y sus partidarios en las elecciones generales del 23 de febrero de 1946.

La movilización social que se expandió en la campaña electoral continuó en los primeros años de peronismo en el poder; hasta 1948-1949 se registran índices de huelgas y huelguistas de los más elevados en la historia del movimiento obrero. Pero paralelamente el movimiento fue perdiendo autonomía; lo que en sus inicios podía ser considerado como un movimiento policéntrico fue rápidamente subordinado a la dirección única de Perón. El Partido Laborista fue disuelto y los líderes más proclives a la autodeterminación, desplazados.

¿Cómo fue posible que Perón y su grupo suscitara y hegemonizara un movimiento de base obrera? Este interrogante puede ser precisado en relación al movimiento obrero organizado, preguntándonos por las condiciones que posibilitaron el abandono o el rebasamiento por parte de la clase obrera del encuadramiento en los sindicatos influidos por socialistas y comunistas, originando populistas y admitiendo un liderazgo político explícitamente ajeno a la propia organización obrera.

Una interpretación sobre los orígenes del peronismo, enfatiza las consecuencias del rápido proceso migratorio que desde la segunda mitad de la década de los treinta multiplica las filas de los asalariados urbanos; los migrantes de reciente data, mayoritarios hacia mediados de la década de los cuarenta habrían sido una masa políticamente inexperta y aun proclive a aceptar – por transmutación de las relaciones vividas previamente en el medio rural – liderazgos personalistas y autoritarios.

La investigación de la que este artículo forma parte se propone interpretar la formación del peronismo como resultante de un proceso particular de lucha social establecido en torno de la propia constitución de las clases sociales características del sistema capitalista, la burguesía y la clase obrera. Atribuimos una significación causal a la crisis de Estado y a las transformaciones estructurales inherentes al desarrollo del capitalismo industrial, como alternativa a un enfoque que conceptualiza los procesos ocurridos en términos de pasaje de la sociedad tradicional a la sociedad moderna.

- Expansión de su papel productivo, nacionalización político-ideológica y conformación como fuerza colectiva son las principales dimensiones conflictivas de la constitución de los obreros como clase social. Este proceso no está resuelto cuando se produce el golpe de Estado del 4 de junio de 1943 y se abre en consecuencia la posibilidad de que la élite peronista se haga cargo de las demandas generadas por los asalariados en el transcurso de esta lucha.

Perón y su grupo emergen de una situación en que las fuerzas armadas se han apoderado del gobierno desplazando a los dirigentes respaldados por las clases dominantes. Así se estructura una nueva voluntad política que procura preparar una salida a la crisis nacional reorganizando el Estado y modificando las relaciones de fuerza entre las clases. Pero el proceso que se desencadena desde la cúspide del Estado reconoce en su transcurso múltiples intervinientes.

I. ANTECEDENTES: SINDICATOS Y FUERZAS POLÍTICAS DESDE LOS ORÍGENES HASTA LA GRAN CRISIS

En los albores de la gran crisis de 1929-1930 el movimiento obrero aparece debilitado y disperso. En esta fase ya ha comenzado una transición en las características de la actividad y de la asociatividad sindical, pero si el sindicalismo de las sociedades de resistencia basado en el oficio está en crisis, el nuevo sindicalismo de industria propio al asalariado de la gran industria mecanizada no se ha consolidado aún.

En estas décadas iniciales de la historia social argentina el movimiento obrero está presente en la escena política y social de un modo original; no está ni legal ni formalmente admitido aunque su incidencia es desde una época

temprana fundamental dado que constituye junto con la pequeña burguesía las principales fuerzas movilizadas.

Las orientaciones dispares que se disputan la hegemonía del movimiento obrero en su fase naciente, y que reflejan las condiciones de existencia de éste, están potenciadas por el activismo sindical y político que llega con el torrente migratorio. Los socialistas postulan la integración nacional a través del sistema político y en consecuencia la subordinación de sindicatos, confinados a un papel reivindicativo, al partido político. Los anarquistas en cambio encarnan la resistencia al Estado y al mundo de la política, considerado como un reducto de la burguesía. Posteriormente, una tercera corriente llamada sindicalista, confiada en la eficacia de la dinámica sindical unificada por sobre las discrepancias ideológicas e independiente de toda vanguardia política, procura desplazar a las dos anteriores.

1. Fase inicial

En las tres últimas décadas del siglo XIX se constituyen las primeras organizaciones obreras. Los intentos federativos son efímeros hasta la constitución de la Federación Obrera Argentina (FOA) en 1901.

La primera celebración del 1º de mayo, que se realizará en 1890, será la ocasión de los primeros enfrentamientos entre los socialistas partidarios entonces de un intervencionismo estatal que intente a los patronos a otorgar ventajas a los asalariados y de una legislación del trabajo protectora, y los anarquistas, que se oponen a reformas que fomentan las ilusiones entre los trabajadores cuando de lo que se trata es de destruir el sistema.

2. Predominio del anarco-sindicalismo

Durante los comienzos del 1900, se crea la Federación Obrera Regional Argentina (FORA), continuación de la FOA, que fue la central sindical más poderosa durante este período; esta organización postulaba los principios del comunismo anárquico. Se consolidaba así la corriente bakuninista partidaria de una acción esencialmente centrada en los sindicatos y que concebía a éstos no sólo como órganos de defensa de clase sino también como embriones de la sociedad futura basada en el solidarismo. Los anarquistas confiaban exclusivamente en la acción directa de los trabajadores y consideraban en cambio a la política como una actividad que amenazaba con enredar a los trabajadores en la institucionalidad del sistema.

La FORA declinará en la década siguiente como resultado de la represión; posteriormente fue desplazada por las corrientes sindicales partidarias de estrategias reformistas.

Otras tendencias existían en el sindicalismo de la época. Ya desde 1903 la Unión General de Trabajadores (UGT), creada por iniciativa de los socialistas, canalizaba a los trabajadores favorables a una legislación protectora del trabajo y que proponían canalizar la acción sindical por vía del sistema político lo cual implicaba la ampliación de la ciudadanía. Esta

organización, minada por los conflictos que aparecerán con el desarrollo de una corriente sindicalista, finalizará por disolverse en 1906.

3. Predominio sindicalista

En la primera mitad de la década de 1910, el movimiento obrero disminuyó su actividad.

En 1909 los intentos por realizar la fusión de las diferentes centrales habían fracasado, dando lugar en cambio a un reagrupamiento de las corrientes no foristas en la Confederación Obrera Regional Argentina (CORA).

La nueva entidad se inspira en los principios del sindicalismo revolucionario. Para éstos, como para los anarquistas, el sindicato es la organización propia de los obreros y la alternativa de éstos frente al Estado burgués.

Aunque esta corriente era conocida bajo la denominación de sindicalismo revolucionario, sus postulados encerraban una ambigüedad en cuanto a la relación con el Estado. Partidarios de una revolución social, consideraban al mismo tiempo que las reformas acercan el momento revolucionario.

También es un período de movilización reivindicativa excepcional. El número de huelguistas registrado desde el fin de la guerra hasta 1921 sólo encontrará equivalente tres décadas más tarde, justamente después de la segunda guerra mundial.

La nueva tónica de negociación no obsta para que se produzcan enfrentamientos de grandes proporciones; ayudan a ello la intransigencia patronal, la predisposición policial a la violencia y la voluntad de los nuevos gobernantes radicales de demostrar su capacidad para controlar el orden público.

4. Década de los veinte: divisiones acentuadas y declinación

La declinación de los "sindicalistas" se ve acompañada por el renacimiento de alternativas de acción política en el activismo sindical. Primero surgen los simpatizantes de la Revolución rusa y hacia mediados de la década se cristaliza un incremento de influencia de los militantes del Partido Socialista.

La FORA luego de un quinquenio de auge declinará rápidamente hasta su disolución. Esta entidad se fusionará con gremios autónomos dando lugar a la creación, en 1922, de la Unión Sindical Argentina (USA). Por entonces los efectivos sindicales han descendido a niveles comparables a los existentes a principios de siglo.

Un hecho saliente de esta década es la expansión de los sindicatos de servicio y en particular el fortalecimiento y la unificación de los ferroviarios. Sobre la base de este gremio y bajo la incitación de los socialistas que ejercían

una influencia en su seno, se crea en 1926 la Confederación Obrera Argentina (COA) que se da una declaración estatutaria abiertamente reformista.

A lo largo de la década disminuye la lucha reivindicativa.

II. SINDICATOS Y FUERZAS POLÍTICAS EN LA ARGENTINA PREPERONISTA

La estructura sindical que se expande y consolida entre 1930 y 1943 será un objetivo a conquistar para las fuerzas políticas antagonistas y, a la vez, un protagonista del proceso de formación del peronismo.

- La concepción gremial del sindicalismo se corporiza en la constitución de la Confederación General del Trabajo (CGT) por fusión de la Confederación Obrera Argentina (COA) y la Unión Sindical Argentina (USA), poco tiempo después del golpe de Estado que lleva al gobierno al general Uriburu.

Las características del período son aparentemente contradictorias: por una parte, se consolida una concepción gremial de la organización sindical, es decir, la asociación de trabajadores en función de la defensa de sus salarios y condiciones de trabajo. Ello fortalecerá la tendencia a la formación de organismos representativos únicos. Por otra parte, la relación del sindicalismo con el Estado y con el sistema político adquiere un peso decisivo; se pueden delimitar dos períodos, anterior y posterior a 1935, en función del clivaje que se produce en las referidas dimensiones.

- En la primera fase (1930 -1935) una mayoría de “sindicalistas” promueve el apoliticismo de los sindicatos y la neutralidad frente al gobierno.
- En la segunda fase (1936 - 1943) hay una hegemonía, al menos formal, de adherentes y simpatizantes del Partido Socialista. El conflicto entre la lealtad partidaria y lealtad sindical entre los socialistas estallará en el II Congreso de la CGT, en octubre de 1942. En este período la minoría constituida por los militantes comunistas organizadores de los sindicatos de industria desafía el control tradicional de la CGT.

III. PERÍODO 1930 - 1935

El golpe de Estado y la subsiguiente represión colocaron a los dirigentes sindicales procegetistas frente a una situación nueva y difícil; en vista de ello aceleraron las gestiones unitarias. Para salvar una incómoda legalidad en medio de la persecución cuyas víctimas privilegiadas eran los anarquistas y también los comunistas, se adoptaron actitudes conciliatorias hacia los nuevos gobernantes.

Esta actitud revelaba la incapacidad de una reacción adecuada frente a la intensa represión de los 14 meses de dictadura militar. En este período impera la ley marcial y el Estado de sitio.

- En la actividad específicamente sindical la acción de la CGT no fue exitosa. El nuevo papel de la central sindical era definido como el de un grupo de presión que busca participar en los organismos estatales y contrarrestar en su seno la influencia de las organizaciones patronales.

Dos obstáculos mayores se oponen al éxito de esta línea:

- En primer lugar la coyuntura de crisis con los consiguientes efectos desmovilizadores sobre los trabajadores y el aliento a la intransigencia patronal.
- En segundo lugar, la ausencia de una disposición gubernamental a realizar una política social sobre la base de la cual negociar con los sindicatos. Pese a que el inicio de los treinta marca en Argentina como en el resto del mundo una extensión del área estatal, expresión de lo cual son las juntas y comisiones de las que participa la CGT, se mantiene a la vez una política liberal y autoritaria hacia el movimiento obrero.

La frustración del activismo obrero incidirá en el cambio de orientación y dirección en el movimiento obrero, que se producirá a mediados de la década.

Los socialistas se beneficiaban de su situación de minoría crítica, sin embargo su política sindical era también reacia al enfrentamiento directo y proclive a la participación en el Estado, aunque preferentemente por los canales parlamentarios.

Influye también en el descrédito de las posiciones apoliticistas el giro de la situación internacional. El tema del antifascismo vehiculado desde el inicio por los militantes socialistas que enfatizan el peligro de los proyectos autoritarios nativos y el accionar de los grupos de ultraderecha, se refuerza con la aparición de los frentes populares y los ecos de una tal estrategia en la escena política nacional. La exigencia de un papel político de la CGT en alianza con los partidos democráticos, aparece justificada y promisoría.

Los enfrentamientos entre socialistas y sindicalistas se extienden a lo largo de los años 1934 y 1935.

Los desacuerdos entre el Partido Socialista y los líderes sindicalistas comienzan a tomar estado público en 1932. Por entonces el malentendido parece sutil. El Partido Socialista propone a la CGT una coordinación de actividades “en pro de las libertades y derechos populares”, de denuncia de las organizaciones civiles armadas y de contraofensiva ante la regresión en la legislación del trabajo. La CGT aparentemente acepta la propuesta partidaria,

pero en realidad la revierte, considerándola como la adhesión de una fuerza política al movimiento obrero por sus objetivos gremiales.

En 1933, el debate de fondo se entabla sobre la posición definitiva de la CGT ante el insistente reclamo de los socialistas de participación en la movilización antifascista. La mayoría argumenta que siendo la actividad política nacional el dominio de la burguesía, cualquier colaboración con iniciativas adoptadas por partidos políticos comportaría el abandono de la independencia de clase y sería en consecuencia perjudicial.

- El debate sobre el fascismo concluye, en el Comité Federal, con una declaración en que se ratifican las posiciones mayoritarias: autonomía de la organización sindical, rechazo de las alianzas políticas, definición de la CGT como institución de “índole esencialmente económica”, y coincidentemente con esta definición, aconseja evitar el fascismo (que es designado alusivamente como una de las formas de la reacción capitalista) atacando sus causas, que en estas perspectivas no pueden ser otras que económicas, es decir, suscitando un vasto movimiento para superar la desocupación.

En 1934 la Comisión Socialista de Información Gremial (CSIG) es acusada de inmiscuirse en los sindicatos y de realizar un trabajo fraccional en su seno; luego de pedir infructuosamente al Partido Socialista que disuelva la CSIG, se establece la incompatibilidad entre la pertenencia a ésta y el ser miembro del Comité Confederal.

A lo largo de este enfrentamiento, las posiciones sindicalistas se debilitan globalmente debido a la oposición creciente entre la orientación de la cúpula seguetista y la de los principales sindicatos.

- Las asambleas sindicales son invitadas a pronunciarse sobre dos temas: la relación entre sindicalismo y sistema político, y la definición de la base social de la CGT.

Sobre el primer punto los socialistas se proponían producir un cambio explícito que permitiera a los sindicatos integrarse junto a los partidos políticos en la movilización antifascista. En la alternativa entre esta proposición que sanciona una relación específica con el sistema político, privilegiando al parlamento como interlocutor, y la alternativa sindicalista de prescindencia se juegan dos caminos alternativos para el movimiento obrero.

Otro aspecto de la autonomía obrera era encarado en el artículo referido a la incompatibilidad entre cargos políticos y cargos sindicales, propuesto por la mayoría del Comité Confederal. Se sospecha que los socialistas quisieran aprovechar la popularidad derivada de las funciones sindicales para mejorar los resultados electorales; se temía por otra parte la pérdida de identidad proveniente de liderazgos de profesionales de la política que habían abandonado la condición obrera.

El otro punto polémico se refería a los miembros de la CGT. El proyecto socialista proponía que se pudiesen sindicalizar todos los “explotados”, incluyendo en esa categoría a las profesiones liberales, en cambio los sindicalistas limitaban la incorporación a los asalariados - lo que incluía eventualmente a profesionales - privilegiando así un criterio de fuerza de trabajo como base de la unidad corporativa. Los socialistas, que finalmente abandonarán su proposición para el Congreso Constituyente de marzo de 1936, se proponían diluir el movimiento obrero en un gremialismo aclasista capaz de ser estructurado a imagen y semejanza del aparato partidario.

En 1935, a medida que los socialistas se consolidan en los sindicatos, la posición sindicalista se hace más rígida. La crisis se precipitará cuando el Comité Confederal rechaza el cambio de los representantes en su seno de la Asociación de Trabajadores del Estado y de la Unión Ferroviaria; con esta argucia, los sindicalistas intentaban mantener su control en la cúspide, pero poco después fueron desalojados por la fuerza.

La reacción que conduce a cinco gremios – Unión Ferroviaria, Fraternidad, Confederación General de empleados de Comercio, Unión Tranviarios y Unión Obreros Municipales – que congregan la mayoría absoluta de los adherentes de la CGT, a hacerse cargo de la central obrera puede aducir legítimamente argumentos democráticos. Lo que en unos se justifica por la voluntad de hacer jugar un papel político a la organización de los trabajadores, en otros es más limitadamente una respuesta necesaria a la violación de las reglas de funcionamiento democrático, pero también expresión de criterios organizacionales discutibles.

El apoyo con que cuentan los socialistas proviene sólo en parte de nuevas adhesiones a la ideología partidaria, lo decisivo a mediados de la década es el éxito relativo de la táctica parlamentaria. Pero la influencia parlamentaria de los socialistas y por consiguiente la posibilidad de vehicular los proyectos de ley, disminuirán brutalmente en el quinquenio a venir.

Entre tanto la escisión organizativa parece corresponder a las dos alternativas en pugna. A fines de 1935 hay formalmente dos CGT, pero la sindicalista, decididamente minoritaria, retomará en ocasión de su congreso de 1937 la denominación USA.

IV. PERÍODO 1936 – 1943

A lo largo de este período, el papel político de la CGT y del sindicalismo en general se acrecienta. El nuevo lugar que ocupa en la escena política está posibilitado por la crisis del sistema político, lo que invita a la construcción de alternativas en las que un movimiento obrero en proceso de institucionalización podría jugar un papel. Las guerras – España primero y mundial después – polarizan la escena política a la vez que refuerzan la vocación de intervención política directa en el activismo sindical.

Sin embargo, los factores de debilidad están presentes y hacia el final, en 1943, se manifiestan espectacularmente al precipitar la escisión de la CGT.

La relativa marginación de los sindicatos más dinámicos hasta el congreso de 1939, y posteriormente las crecientes discrepancias entre socialistas, comunistas y gremialistas, explican por qué la CGT no cumple un papel de centralización y coordinación de la actividad reivindicativa.

La ley de residencia fue aplicada en numerosas ocasiones contra los trabajadores, los arrestos de militantes sindicales eran frecuentes, y el derecho de huelga no era reconocido, por lo que la intervención de la policía era, en estos casos, frecuente.

1. El papel político de la CGT

1. La constitución de la CGT en el Congreso realizado en marzo de 1936 se hace sobre bases que atribuyen un papel político al sindicalismo. Los artículos controvertidos del estatuto (sobre intervención en los asuntos políticos nacionales, acumulación de cargos políticos y sindicales y adhesión de los profesionales) son aprobados en la versión propuesta por los socialistas.

El acto del 1º de mayo de ese año es ilustrativo de la nueva fase. Es la primera vez en la década que la fecha se celebra con un acto de masas y es la primera vez en la historia del sindicalismo argentino que se asocian en la convocatoria, junto a la CGT, los gremios autónomos, los partidos políticos democráticos, y las asociaciones estudiantiles.

El espíritu de colaboración política con el gobierno, al tiempo que éste continúa la represión al movimiento obrero y se desentiende de la cuestión social, lleva a la central obrera a reacciones ambiguas y en algunos casos de subordinación.

Durante los tres primeros años del período, la izquierda y la central obrera habían actuado de concierto. Los socialistas siendo en general partidarios de una acción legal y ordenada habían adoptado desde el inicio de la década una posición de colaboración crítica y en lógica continuación apoyaron las iniciativas antifascistas y democratizantes de Ortiz.

Los comunistas, en cambio, habían llegado a posiciones democratizantes luego de haber sufrido un cambio esencial de su línea en Argentina, como en todo el mundo.

La mayor expansión del sindicalismo promovido por los militantes comunistas se produce desde mediados de la década con la serie de grandes huelgas en la construcción y la constitución del sindicato de esta rama.

En los años que transcurren hasta la firma del pacto germano-soviético, ocasión de un nuevo viraje espectacular, se producirá una progresión en las posiciones del PCA. Habiendo partido de una línea de frente popular, promotora de movilizaciones populares en la base, se evoluciona hacia

posiciones democrático-liberales. La adopción de la estrategia antifascista tendrá vastas consecuencias en la definición de los enemigos y de los objetivos; la interpretación nacional que recomendaba atemperar el enfrentamiento antiimperialista con Inglaterra y EEUU, con las consiguientes repercusiones moderadoras sobre los conflictos sociales internos, anticipaba una orientación que se realizará plenamente hacia fines de la guerra, cuando el peronismo ya está en gestación.

El acercamiento de los comunistas al PS, al sistema político y finalmente al gobierno, tiene su correlato en el movimiento obrero. A inicios de 1936 se disuelve el Comité de Unidad Sindical Clasista y los sindicatos que lo integran se adhieren a la CGT. Los comunistas son una fuerza institucional en ascenso.

2. La firma del pacto entre la URSS y Alemania, en agosto de 1939, conmueve las bases de la unidad sindical y política del país.

- El PC abandona repentinamente sus posiciones democrático-liberales, propiciando actitudes neutralistas en el movimiento obrero y en el país. Para fundamentar este viraje los comunistas acuden a la tradición leninista que rechazaba la aceptación de compromisos nacionalistas por la clase obrera, en la guerra entre países capitalistas, y a la tradición yrigoyenista que condujo a la Argentina al neutralismo en la primera guerra mundial invocando los intereses estrictamente nacionales.
- La nueva óptica que privilegia la contradicción entre socialismo y capitalismo, pero reubicándola en una perspectiva antiimperialista en Argentina, es indiferente a las formas políticas: democracia y fascismo.
- Las posiciones comunistas diametralmente opuestas a las inspiradas por los socialistas y compartidas por ellos mismos antes del viraje de la Unión Soviética, reencuentran un cierto eco en sectores tradicionales del sindicalismo.
- La CGT pone en suspenso sus posiciones prooccidente democrático y adopta, durante un período, posiciones que procuran contener las discrepancias; en la adopción de esta postura influía sin duda el peso de los comunistas en el Confederal y su influencia creciente en el sindicalismo de industria, y el deseo de evitar al movimiento obrero una situación de ruptura.

En mayo el Comité Central Confederal (CCC) se reúne para rectificar la línea. La mayoría propone pronunciarse contra la ofensiva alemana en el oeste de Europa, encontrando una cerrada oposición comunista. A partir de ese encuentro, el enfrentamiento entre comunistas y no comunistas se acentúa paralizando el funcionamiento del CCC por un largo período.

- En los meses de receso del órgano directivo de la CGT se producirá una reacomodación en las fuerzas sindicales, que partiendo de una diferenciación en el grupo de socialistas y

simpatizantes, conducirán a una escisión en la central obrera en marzo de 1943.

Estos hechos ocurren en el contexto de acontecimientos políticos nacionales que en parte los condicionan. El 3 de julio, el presidente Ortiz, enfermo, se ve obligado a delegar el mando en el vicepresidente Castillo, lo que pone en peligro el proceso de democratización que se había iniciado con la intervención en la provincia de Buenos Aires, dado que el nuevo mandatario no comparte las orientaciones de su predecesor.

En diciembre de 1941 se implanta el estado de sitio argumentándose que la entrada en la guerra de los Estados Unidos acentuaría los conflictos internos, y se prohíbe tratar públicamente los temas relacionados con la guerra.

Mientras la CGT se movilizaba con lemas antifascistas, la Unión Ferroviaria manifestaba su voluntad de respetar la neutralidad estrictamente, de conformidad con el decreto del PE y con el propósito de salvaguardar la integridad del sindicato. De hecho el gremio de los ferroviarios se mantendrá en silencio sobre los problemas políticos internos hasta predicar a inicios de 1942 posiciones francamente prescindentes.

- La CGT seguirá el camino de las posiciones del sindicato ferroviario, dado el control que ejerce este último en aquélla.

La nueva orientación de la CGT está condicionada por los problemas e intereses propios al gremio ferroviario; la superposición de liderazgos facilitó una evolución paralela de ambas entidades.

Un gremio frustrado que acuciaba por una solución a sus reclamos y una minoría sindical que consideraba ilegítima la intervención política son elementos internos que, en el contexto de un gobierno activamente reaccionario pero dispuesto a negociar las reivindicaciones, colocaba a los dirigentes frente a la disyuntiva de un repliegue y una cohesión sindical o de una ruptura sin perspectivas.

Pero no debe ocultarse, que se inicia un proceso general de crisis en la ideología socialista y en la perspectiva socialdemócrata en Argentina. Esta escisión entre los socialistas es el primer acto del proceso de mutación del liderazgo sindical; después del golpe del 4 de junio de 1943, muchos dirigentes de las corrientes hasta entonces existentes se convertirán al peronismo, y hasta cierto punto lo crearán.

- Crisis entonces de la ideología socialista en el liderazgo sindical que abarca grandes dimensiones. En primer lugar la perspectiva global para el movimiento obrero y el papel que se atribuye la propia organización partidaria; en segundo lugar, la subordinación del movimiento obrero y la secundarización de los líderes sindicales, ahora insostenible.

2.1. La concepción de la realidad social que proponía el Partido Socialista había nacido articulada a las condiciones anteriores a la crisis de los treinta.

El socialismo se había construido sobre bases ideológicas liberales solidarias del proyecto de gran nación abierta al sistema mundial y de progreso continuo en los lineamientos de la adaptación a la división internacional del trabajo por vía de la acción del mercado.

La labor partidaria se situaba en dos planos: la acción institucional y la actividad educativa. Dado que la convivencia social era construida y no un estado natural, una dirección esencial de la actividad socialista era la legislativa; la elaboración de normas legales debía dar inicio o fortalecer la vida asociativa.

Los socialistas guardaban la imagen armoniosa del orden social que se habían construido antes de la crisis del treinta y persistían en guiarse por ella aún después de años de “distorsión” conservadora.

La desactualización de la orientación socialista a partir de la crisis de los treinta puede sintetizarse en dos puntos:

- La concepción formalizada del sistema político y la confianza en el regreso a la normalidad democrática mantenidas a lo largo de una década de fraude tenían serias consecuencias sobre la posición partidaria. Habiendo beneficiado del abstencionismo radical en el primer quinquenio, el retorno al pluralismo confirma la invariablemente restringida audiencia partidaria. Pese a una considerable labor en legislación del trabajo, la imagen que quedará de los socialistas en este período es la de los exponentes de un democratismo formal que los condujo a cierta complicidad con las manipulaciones conservadoras.
- Por otra parte, la base social del Partido se altera. En la Argentina del capitalismo agrario el PS podía encarnar una aspiración popular reformista. Los asalariados no podían plantearse un proyecto alternativo de sociedad y vastos sectores pequeñoburgueses podían, en cambio, aspirar a participar en el poder político y a una cierta cuota en la distribución del excedente económico. Además en la franja de actividades manufactureras el antagonismo de clases no podía transformarse en una lucha por la dirección de la sociedad.

Con la industrialización cambiará la composición social de los asalariados, la vértebra de la movilización urbana se desplazará a la clase obrera industrial. Precisamente es aquí donde la lucha de clases reviste las características más “inorgánicas” y donde los socialistas revelan su incapacidad ideológica y organizativa, dejando el terreno libre a los comunistas.

La incapacidad de inserción en los nuevos sectores obreros está reforzada por las consecuencias antiindustriales del antiproteccionismo. A lo largo de todo el período considerado, se privilegiarán las reivindicaciones de

los consumidores (tasas aduaneras bajas para permitir el ingreso de productos importados más baratos o de mejor calidad que los producidos internamente) a la de los obreros (protección de la industria y en consecuencia de la fuente de trabajo).

- Además de propiciar la subordinación de lo gremial a lo político, los socialistas se suman a la actividad reclasificatoria del Estado sobre las clases sociales. En primer lugar, separación entre el ciudadano y el productor y prioridad del primero sobre el segundo. Puesto que las clases sociales son concebidas como agrupamientos económicos, la actividad del partido consiste en elevarlas a la ciudadanía, lo que equivale a subordinar los intereses parciales de clase al interés humano general.

En consecuencia los socialistas argentinos a diferencia de la socialdemocracia clásica desalentaron la aparición diferenciada de la clase obrera. Se propuso a lo largo de los años treinta la noción de explotados como alternativa a la más limitativa de asalariados. Se buscaba en realidad transformar la base social del sindicalismo, incorporando los profesionales a la CGT, creando una amalgama que se esperaba fuese más propicia a su influencia.

Cuando los asalariados eran una masa heterogénea, el PS podía aspirar a dotarlos de una unidad e identidad a nivel político. Pero en los años treinta se alteran las bases de la inserción del partido y se debilita su papel institucional al tiempo que el sindicalismo se expande como centro de poder. El crecimiento de la organización sindical y su centralización refuerzan la base autónoma de la dirección sindical.

El fortalecimiento sindical y la creciente base de sustentación que constituye el movimiento obrero incitan a la automatización de los líderes sindicales, un sector de los cuales reúne las condiciones para formar una categoría social con determinaciones propias. Hacia fines de los treinta, se está consolidando en los sindicatos de transporte una “burocracia sindical”, un sector distinto no sólo por su estilo de vida, sino por estar definido por un sistema relacional particular. La cúspide sindical encarna los intereses de supervivencia institucional del sindicato legal, es decir, de mantención de su legitimidad dirigente para lo cual debe encaminar eficazmente las reivindicaciones de su base, y de percepción de los límites de acción fijados por el Estado sin cuyo respeto se pondría en peligro la propia existencia institucional y las posiciones de los dirigentes.

3. La invasión de la Unión Soviética por las tropas alemanas, el 21 de junio de 1941, es la señal para un cambio total en la posición de los comunistas. El líder del PC conmina a la CGT a terminar “con su silencio incomprensible ante la vil agresión de la banda nazifascista contra la URSS”, acusando a los dirigentes sindicales de interferencia ante las vibraciones solidarias de la clase obrera.

Las consignas prácticas que siguen a esta orientación subordinan todo conflicto nacional a la movilización eficaz contra el Eje. Esto supone un giro de 180° respecto a la anterior línea antiimperialista y a la sensibilidad a los conflictos sociales que se deducía de ella. El objetivo de la actividad partidaria es el de incorporar la Argentina al frente aliado.

En octubre de 1942, como resultado de la alianza socialista-comunista ahora mayoritaria, el CCC compromete nuevamente a la CGT en iniciativas políticas nacionales.

El II Congreso de la CGT realizado en diciembre de ese mismo año, consagra el triunfo de la alianza entre socialistas y comunistas.

Cuando el Comité Central Confederal surgido del Congreso se reúne por primera vez en marzo de 1943 para elegir su órgano ejecutivo, la Comisión Administrativa, la delegación ferroviaria votando en bloque y sumados los sufragios de sus aliados intenta imponer nuevamente su hegemonía con una lista encabezada por J. Domenech. Los miembros del Confederal que habían sido mayoritarios en el Congreso se oponen a esta solución considerándola resultado de una maniobra fraudulenta y dando por electa a su propia lista que consagra en la secretaría de la CGT a Ángel Borlenghi. Ambas fracciones reclaman su reconocimiento respondiendo respectivamente a las designaciones de CGT n° 1 y CGT n° 2.

2. Un proceso de sindicalización desigual

El considerado es un período de crecimiento y centralización sindical. El crecimiento, sin embargo, apenas acompaña la propia expansión de la ocupación en actividades asalariadas urbanas; el peso relativo al sindicalismo sólo se mantiene. La centralización es efectiva porque la CGT es incontestablemente la central más importante, congrega alrededor de tres cuartos del total de adherentes, pero sin que se produzca una unificación sindical total aunque ésta es una aspiración explícita de las principales corrientes.

Un sector de la clase obrera, tenía ya, a inicios de los treinta, sindicatos representativos y que cumplían funciones mutuales y asociativas, amén de su tradicional defensa de los asalariados y condiciones de trabajo.

La política que inspiran los sindicatos dominantes está destinada a preservar su control sobre la dirección de la central obrera. En el Congreso constituyente, a los sindicatos industriales bajo dirección comunista se los invita únicamente como observadores, lo que facilita la adopción de cláusulas estatutarias favorables a los grandes sindicatos.

Estas decisiones posibilitan que la CGT con epicentro en el sindicalismo de los asalariados más institucionalizados, aparezca como una estructura autónoma, alejada de la movilización y que más que representar a los sectores activos, les ofrece un canal de mediación. Los sectores movilizados están poco

integrados en la estructura sindical y la CGT hace pocos esfuerzos para integrarlos.

Las divisiones en los sindicatos o el reflejo de la lucha entre las centrales en sindicatos de industria, provocaron en el período un saldo negativo de sindicalización.

Pero el obstáculo principal que desbaratará el crecimiento sindical en un período en que la clase obrera duplica su número, parece haber provenido del agotamiento de las perspectivas políticas nacionales; no es casual que el sindicalismo se haya expandido estando presente la perspectiva frente-popular y que la expansión se haya detenido inmediatamente después. La movilización de una clase que no ha obtenido legalidad social, pues sus organizaciones y su acción no son reconocidas por el Estado, y que en ese sentido lo máximo a lo que puede aspirar es a la tolerancia gubernamental, y que por otra parte se enfrenta a una clase capitalista, ella misma poco constituida socialmente, está fuertemente condicionada por el contexto político.

- En primer lugar porque su constitución como fuerza social legítima está asociada a un cambio de régimen político y de organización social y que la existencia de esta perspectiva en el horizonte político alienta la movilización.
 - En segundo lugar porque sus reivindicaciones más inmediatas (que siempre plantean, de todos modos, el problema de la legitimidad de la negociación colectiva, impugnada por la burguesía) sólo pueden lograrse a través de una amplia movilización y de amplias alianzas sociales.
-

➤ PERONISMO, SINDICATOS Y POLÍTICA EN LA ARGENTINA (1943 – 1981)

MARCELO CAVAROZZI

I. RASGOS DE LA POLÍTICA ARGENTINA ENTRE 1943 Y 1955

El año 1955 constituyó un hito clave en la historia del movimiento obrero argentino. Esa fecha marcó un profundo corte en la historia social y política de la Argentina que trascendió el quiebre institucional que se produjo a raíz del triunfo de la insurrección militar que puso fin a la presidencia de Perón. El golpe militar, de alguna manera, explicitó una doble crisis económica y política que afectaba a la Argentina desde principios de la década de 1950. Esta crisis:

- Por una parte, señaló el agotamiento de la primera etapa del proceso de industrialización semicerrada que se había inaugurado a partir de la crisis económica mundial de 1929-1932. Dicha etapa se caracterizó principalmente por la expansión del sector manufacturero productor de bienes de consumo no duradero.
- Por otra parte, en 1955 hizo crisis la fórmula social que se había estructurado durante la década del régimen peronista. Los mecanismos centrales de dicha fórmula fueron un modelo de conciliación de intereses y un modelo político basado en la relación líder-masas y en la concepción “movimientista” que primó en la articulación del peronismo gobernante.

La fórmula social del peronismo mientras se mantuvo en el poder, tuvo dos elementos fundamentales:

- El primero fue un modelo económico de conciliación parcial de intereses: su premisa básica fue que la economía argentina permitía una tasa de crecimiento aceptable satisfaciendo simultáneamente los intereses de la clase trabajadora urbana y del grueso de la burguesía urbana, sobre la base de la expropiación parcial de los beneficios extraordinarios provenientes de las explotaciones agrícolas y ganaderas de la región pampeana.

Una serie de profundas transformaciones permitieron, por un lado, el cuestionamiento por parte de los trabajadores de la hasta entonces absoluta discrecionalidad patronal en el lugar de trabajo, y, por el otro, contribuyeron a socavar parcialmente el carácter jerárquico de las relaciones de clase en las distintas arenas sociales. Estas transformaciones incluyeron: 1) la rápida expansión de la sindicalización; 2) la difusión y el incremento del poder de los delegados obreros y las comisiones internas de fábrica, y 3) el cuestionamiento de los valores y el prestigio de la tradicional burguesía dominante de la Argentina, es decir, la oligarquía.

- Por otro lado, enfatizó los elementos estrechamente vinculados entre sí. El primero fue la relación directa entre el líder y las masas; la capacidad de las masas de producir efectos pertinentes en la política fue mediada por Perón en un doble sentido: las victorias políticas de aquéllas aparecieron como concesiones del líder y, asimismo, éste constituyó la garantía última de que las demandas populares no desbordarían al sistema capitalista.

El segundo elemento del modelo político fue la concepción “movimientista” del peronismo. Se postuló como un movimiento nacional situado por encima de los intereses sectoriales de clase. Dentro de él orientaciones y objetivos diversos se conciliaron subordinándose jerárquicamente al líder. La concepción movimientista afectó negativamente la posibilidad de que se estableciera un sistema democrático y pluralista: la subordinación absoluta a Perón de los funcionarios electos limitó el alcance y la vigencia de la soberanía popular, y consecuentemente, la posibilidad de que se expresaran los conflictos sociales quedó severamente limitada.

- En suma, el despliegue de la fórmula política del peronismo tuvo efectos contradictorios sobre la sociedad argentina: por una parte, contribuyó a tornarla socialmente más pluralista e igualitaria, y, por la otra, tendió a restringir la vigencia de modalidades autónomas de participación política de los sectores populares, y, a poco de instalado Perón en el poder, favoreció la creación de un aparato sindical centralizado que reprimió sistemáticamente las expresiones de posiciones disidentes y las acciones de protesta obrera no sancionadas oficialmente.

La influencia de las políticas y las orientaciones estatales durante la década peronista contribuyó a reforzar tendencias a las que el movimiento obrero argentino tampoco resultaría inmune después de 1955: la búsqueda de la tutela estatal tanto en la arena de la lucha política como en la de las negociaciones obrero-patronales y una concepción de acuerdo a la cual un sindicalismo organizado jerárquica, y no democráticamente, resultaría más eficaz en sus enfrentamientos con sus adversarios sociales y políticos.

Uno de los cambios más significativos producidos en 1955 ocurrió precisamente en el movimiento obrero. A pesar de que éste continuó siendo predominantemente peronista, sus características internas, incluido el modo en que se vincularon la clase y las organizaciones sindicales, y el estilo de sus relaciones con el Estado se modificaron sustancialmente.

II. CRISIS POLÍTICA Y CONSTITUCIÓN DE UN NUEVO SINDICALISMO PERONISTA: 1955 - 1958

El período 1955-1958 fue de una importancia decisiva en la historia argentina contemporánea. Durante él se conformaron los principales atributos del régimen posperonista; como consecuencia de ello, se produjeron modificaciones en la relación de fuerzas entre las clases sociales

fundamentales y se redefinieron los papeles de los actores políticos centrales, es decir, los partidos políticos, los militares, el movimiento obrero peronista y el mismo Perón.

El movimiento obrero no perdió su carácter peronista, y al mismo tiempo, emergió como una fuerza dotada de mayor autonomía e iniciativa política que las que había disfrutado durante la década de 1945-1955. Durante la segunda mitad de la década de 1950, el movimiento obrero peronista experimentó derrotas políticas ocasionales y sufrió reveses económicos y sociales. A pesar de ello, se convirtió en una pieza esencial del régimen político posperonista y desarrolló una capacidad para bloquear los diversos intentos de modificar la estructura de distribución de ingresos vigente hasta 1955.

La caída del gobierno peronista fue el resultado de las acciones de un vasto frente político que agrupó a todos los partidos políticos no peronistas, a los representantes corporativos e ideológicos de las burguesías agraria y urbana y de los sectores medios, a las fuerzas armadas y a la Iglesia Católica.

- El frente antiperonista se unificó fundamentalmente en torno a la reivindicación de la democracia como imagen opuesta a la de la “dictadura totalitaria”. A la dictadura se le achacó la concepción personalista del poder, la parcial invasión de las esferas de la sociedad civil por parte del Estado y la reducción de los espacios de actuación de los partidos opositores.

La unidad alcanzada por el antiperonismo comenzó a resquebrajarse cuando llegó el momento de ejercitar el poder para resolver las dos cuestiones que ocuparon el centro de la escena política a partir de la caída de Perón:

- El alcance a darle al intento de erradicación del peronismo: en este sentido las diferentes posiciones cubrieron un espectro que fue desde el “integracionismo” (que postuló la reintegración del peronismo purgándolo de sus “elementos nocivos”, entre ellos, Perón) hasta el “gorilismo” (que nunca cejó en sus intentos de extirpar totalmente el fenómeno peronista de la sociedad argentina)
- El modelo económico que eventualmente reemplazaría al vigente durante el período anterior (1945-1955); dentro del antiperonismo coexistieron básicamente tres posiciones con respecto al curso a seguir:
 - a) Reformista: no cuestionó las premisas fundamentales del modelo de conciliación de intereses inaugurado por el peronismo (conveniencia que los intereses de los trabajadores y la burguesía urbana fueran promovidos simultáneamente y apoyo a un moderado nacionalismo económico); sin embargo esta posibilidad criticó al mismo tiempo los efectos que las políticas del peronismo tuvieron en desincentivar a los productores agrarios de la Pampa Húmeda y la preponderancia excesiva que tuvieron los gastos corrientes del Estado sobre las inversiones públicas.

b) Desarrollista: Sostuvo que el estancamiento económico argentino era el resultado de una base industrial insuficiente que debía ser ampliada mediante un proceso de profundización que abarcara la expansión de los sectores productores de bienes intermedios y de capital y la modernización de la infraestructura; asimismo, postuló que el modelo de conciliación de intereses constituía una contradicción insuperable. Los desarrollistas adoptaron una postura favorable a las inversiones extranjeras en los sectores de infraestructura y en la industria.

c) Liberal: No sólo cuestionó el modelo de la conciliación de intereses, sino además, a su permisa central, es decir la postulación de que la industrialización continuara siendo el eje dinámico de la economía. Los liberales rescataron los temas voceados por quienes postulaban un retorno a la situación pre-1930. El liberalismo económico señaló la necesidad, por un lado, de reducir el sector industrial a aquellas ramas complementarias de la economía agroexportadora que resultasen competitivas internacionalmente y, por el otro, de corregir drásticamente el concomitante sobredimensionamiento del Estado.

Como consecuencia de la coexistencia de objetivos diversos, y a veces antagónicos, dentro del mosaico antiperonista, el período entre septiembre de 1955 y fines de 1958 presencié numerosas contramarchas en las políticas gubernamentales que, a menudo, neutralizaron los efectos buscados por aquellas políticas y causaron otros no deseados.

La ofensiva del gobierno militar de la “Revolución Libertadora” en contra del peronismo consistió básicamente de dos aspectos:

- Se intentó dismantelar los mecanismos del modelo político del peronismo, es decir la relación líder-masas y la concepción movimientista. Perón comenzó un exilio que se extendería por más de diecisiete años; el partido peronista fue disuelto y toda mención de Perón y de los eslóganes peronistas fue prohibida. Todo esto tuvo como efecto reinstalar a los partidos políticos no peronistas en el centro de la escena política, al menos desde la perspectiva del discurso oficial.
- Por otro lado, los militares desencadenaron una ofensiva total en contra del movimiento obrero peronista.

Las ambigüedades ideológicas de las políticas antiperonistas, el bajo grado de represión aplicado y las reiteradas contramarchas gubernamentales en materia de política económica, sumados a la oposición de los trabajadores a las políticas estatales tuvieron como efecto hacer fracasar rotundamente el intento de liquidación del movimiento obrero peronista.

El gobierno militar del período de 1955-1958, asimismo, facilitó de otro modo la recomposición de un movimiento obrero peronista que se definió sobre nuevas bases. La ideología cruda y explícitamente antiperonista de los

militares y de sus aliados contribuyó a reforzar la identidad peronista de los trabajadores y de otros sectores populares, al constituirse en un polo que, por oposición, aglutinó a lo que se le enfrentaba.

- Entre 1955 y 1957, entonces, se produjo el desmantelamiento del régimen peronista, lo que implicó, entre otras cosas, la destrucción de las modalidades de relacionamiento que habían existido entre, por un lado, los sindicatos y, por el otro, el Estado, Perón y las restantes fuerzas políticas. Sin embargo, ya en 1958, un nuevo sindicalismo peronista (liberado de la mayoría de los corsés políticos a los que había estado sometido entre 1945 y 1955 y alimentándose de una eficaz ideología opositora) había recreado un espacio político que le permitiría hacer frente a las nuevas ofensivas que se desatarían a partir de 1959.

La derrota del candidato apoyado por los militares en las elecciones presidenciales de 1958 fue, en gran medida, el resultado del pacto que el candidato triunfante, Frondizi, celebró con Perón.

Durante 1958 Frondizi fue desplegando una política alternativa que se anudó fundamentalmente en torno a dos ejes:

- La “integración”, que en los primeros meses del gobierno consistió en una reafirmación del reconocimiento de la mayoritaria identidad peronista de la clase obrera; y,
- Políticas desarrollistas, que, en cambio, implicaron un abandono completo de los contenidos redistributivistas y reformistas del programa “nacional y popular”.

Los últimos meses de 1958 presenciaron una creciente intensificación de los conflictos entre el gobierno y los sindicatos; las estrategias antagónicas de uno y otros hacían imposible una conciliación. El frondizismo gobernante propició el establecimiento de un sindicalismo “representativo” (entendido como reconocer la mayoritaria identidad peronista de los asalariados absteniéndose de bloquear, en incluso promoviendo, la primacía de los sindicalistas peronistas y el desplazamiento de comunistas y democráticos) y “responsable” (se definió como responsables a aquellos dirigentes capaces de institucionalizar y contener parcialmente las demandas “excesivas” y acciones espontáneas de las bases).

La inevitable agudización del enfrentamiento entre gobierno y sindicatos tuvo una contracara complementaria: el acercamiento entre el gobierno y el gran capital.

En los últimos meses del año las acciones del gobierno y de los liberales despejaron el camino para el acuerdo político en que se apoyó el plan de estabilización económica con el que se inauguró 1959: el gobierno, al decretar el estado de sitio como respuesta a las huelgas y movilizaciones obreras y reprimir duramente a los sectores asalariados que se opusieron a sus políticas; los liberales al anunciar expresamente una posición antigolpista.

❖ A fines de diciembre, la confluencia entre el gran capital y el gobierno, quedó simbolizada por la concreción de un préstamo del Fondo Monetario y el preanuncio del inminente lanzamiento del plan de estabilización. El programa no dejó margen alguno para la negociación con el movimiento sindical.

En 1959 el movimiento sindical peronista perdió la iniciativa política que había mantenido frente al gobierno durante el período 1956-1958; su capacidad para hacer abortar las políticas antiinflacionarias basadas en la reducción del salario real se redujo significativamente. Estos cambios abrieron una nueva etapa en la que el sindicalismo peronista pasó a ocupar un espacio eminentemente defensivo, aunque de todas maneras estratégico, desde el cual su nunca abandonada oposición a las políticas antiinflacionarias tuvo efectos más retardados.

III. TRANSFORMACIÓN ECONÓMICA Y CONSOLIDACIÓN DEL SINDICALISMO OPOSICIONISTA PERONISTA: 1959 – 1966

El cambio en la inserción del movimiento obrero en la sociedad argentina fue profundamente influido por las transformaciones económicas de principios de la década de 1960. En las etapas anteriores los avatares de la clase obrera y de los sindicatos habían dependido casi exclusivamente de los resultados de la lucha política y de las orientaciones coyunturales del gobierno. A partir de 1959, en cambio, el crecimiento de los sectores industriales productores de bienes de consumo duradero y la expansión de la infraestructura tuvieron un impacto directo sobre la situación de los trabajadores.

Durante 1959 la implementación del plan de estabilización deprimió abruptamente el nivel de los salarios reales; si bien éstos se recuperaron parcialmente durante los dos años siguientes, un nuevo intento estabilizador en 1962 reprodujo la situación, pero con el agravante de que en este período se produjo un fuerte incremento de la tasa de desocupación. Las crisis de 1959 y 1962 no dejaron de influir sobre las orientaciones de los dirigentes obreros al marcar bien crudamente las consecuencias que se derivaban para los asalariados de la gradual transformación de la economía argentina en la dirección de un mayor peso de los procesos de acumulación centrados en los sectores más concentrados del capital.

El movimiento obrero en la primera mitad de la década de 1960 tuvo como figura predominante al dirigente peronista Augusto Vandor, secretario general de la UOM. Las características esenciales del período fueron:

- Un atributo de las prácticas sindicales fue el reconocimiento de que en situaciones económicas recesivas convenía recurrir a métodos de negociación y presión más contemporizadores que lo empleados en 1956 y 1958.

- Una nueva estrategia de acción de los dirigentes sindicales peronistas que combinó, por un lado, la adopción de una postura defensiva en la cual las únicas reivindicaciones que se mantuvieron fueron las corporativas (en particular, no intervención de los gremios y vigencia efectiva de las normas y prácticas electorales en los sindicatos), y por el otro, el esfuerzo por autonomizar la supervivencia misma de los sindicatos de la suerte corrida por las acciones de lucha de la clase.
- Además, el nucleamiento peronista predominante, es decir el vandorismo, renunció a partir de principios de la década de 1960 a sus pretensiones de establecer un sindicalismo que excluyera a dirigentes no peronistas y bloqueara la expresión de disidencias dentro del movimiento obrero peronista. A pesar de las numerosas alianzas coyunturales que el movimiento sindical peronista estableció con sindicatos y corrientes no peronistas, uno de los objetivos que el peronismo había mantenido inalterablemente hasta 1959 fue el de retornar a la privilegiada situación de monopolio peronista que había imperado hasta septiembre de 1955.

El centro del movimiento sindical peronista fue ocupado por el vandorismo. Éste percibió correctamente que el mantenimiento de la base del poder político del sindicalismo, es decir la capacidad de los dirigentes de frenar y manipular las reivindicaciones y movilizaciones de los trabajadores, dependía de hacer recordar periódicamente a sus adversarios (el Estado y la patronal) los riesgos inherentes a toda movilización de los trabajadores.

La capacidad hegemónica que desarrolló gradualmente el vandorismo probablemente no hubiera podido constituirse de no haber contado con la plataforma proporcionada por un gremio como la UOM. La ideología práctica del vandorismo manipuló hábilmente, incluso exaltándolos como virtudes, atributos del sindicalismo que, en parte, la doctrina peronista había condenado hasta 1955. Por una parte, la existencia de un nada despreciable sector Independiente fue esgrimido frente a los antiperonistas más duros como prueba de que las acciones unitarias y otros “inconvenientes” del sindicalismo argentino no eran el producto de un inconfesado designio totalitario sino la expresión autónoma de un sindicalismo plural, aunque a la vez, capaz de fusionarse en oposición a las políticas gubernamentales. Por otra parte, invocando la “esencia nacional” del peronismo, el vandorismo destacó la eficacia del sindicalismo peronista para actuar como barrera ante la penetración comunista en los sindicatos.

- ❖ El reconocimiento de la existencia e influencia relativa de los Independientes implicó, entonces, una renuncia al precepto del monopolio sindical peronista. No fue ésta la única renuncia. Paralelamente se dio una admisión de la existencia de corrientes internas dentro del peronismo, lo que había constituido un anatema hasta 1955. La presencia de los sectores “duros” y combativos del

peronismo permitió al vandorismo agitar la amenaza de una alternativa de confrontación que valorizó su capacidad, y propensión negociadora. Alternativamente, los “integracionistas” proveyeron al vandorismo de un eficaz puente hacia el Estado en aquellas coyunturas en que el enfrentamiento con el mismo alcanzó una intensidad tal que el restablecimiento del diálogo difícilmente hubiera podido concretarse a través de los propios dirigentes vandoristas.

Así se desprende, que el equilibrio interno del movimiento sindical no operó a lo largo de un único eje; él fue más bien la resultante de la superposición de las diferentes dimensiones de las cuales el vandorismo fue eje de intersección.

Hasta 1966 la inserción del movimiento obrero peronista en la arena electoral tuvo dos efectos fundamentales:

- Por un lado, delineó tensiones entre los componentes del peronismo que enfrentaron a los dirigentes sindicales con los políticos peronistas, e incluso con el mismo Perón.
- Por el otro, las maniobras electorales de los dirigentes sindicales contribuyeron a exacerbar los atributos de lo que se llamó el “juego imposible” que caracterizó a la política argentina hasta el golpe de 1966.

El “juego imposible” presentó varias facetas. Su primer ingrediente fueron los dilemas irresolubles a los que se vieron enfrentados los gobiernos constitucionales:

- Cuando procuraron gestar algún tipo de alianza con el peronismo que les permitiera triunfar electoralmente, reavivaron el virulento antiperonismo y las prácticas golpistas de los militares y de sus aliados.
- Cuando intentaron vencer convirtiéndose en el polo antiperonista de la opción, generalmente fueron derrotados, siendo acusados tanto por su falta de representatividad como por su fracaso en erradicar al peronismo.

En segundo lugar, los gobiernos no constitucionales controlados por los militares:

- Estuvieron ideológica y políticamente atados a la proscripción del peronismo, transgrediendo sustantivamente los valores democráticos, en cuya supuesta defensa se desencadenaron los golpes militares de 1955 y 1962
- Los militares no pudieron evitar que el frente partidario no peronista se fraccionara continuamente y se frustraran, en 1958 y 1963, sus intentos de ser sucedidos por descendencias consonantes con las posturas militares.

Finalmente, el despliegue del “juego” facilitó el que comenzaran a plantearse dentro del peronismo las dos contradicciones que tendrían mayor relevancia hasta 1969:

- Aquellas que enfrentaron a políticos y sindicalistas peronistas. En este caso, los primeros gozaron de ciertas ventajas en las provincias más pobres y de menor peso electoral, mientras que poco pudieron hacer para contrarrestar la influencia de los dirigentes sindicales en las provincias con mayores concentraciones de asalariados.
- Aquellas que por otro lado, enfrentaron a sindicalistas y Perón. En una elección de gobernador de la provincia de Mendoza, en 1966, se presentaron dos candidatos peronistas, uno apoyado por Vandor y otro por Perón, que había enviado a su esposa Isabel a que participara en la campaña. La división peronista facilitó el triunfo de un candidato conservador, pero el resultado del enfrentamiento interperonista fue favorable a Perón, cuyo candidato recibió una cantidad apreciablemente mayor de votos que el vandorista, a pesar de que las organizaciones sindicales provinciales y nacionales se movilizaron a favor de este último.

Pocos meses después de la elección mendocina, Vandor prestó apoyo tácito al golpe militar de 1966, cuyos líderes (a diferencia de los militares que protagonizaron los golpes de 1955 y 1962) plantearon explícitamente la suspensión a largo plazo de las elecciones y el juego parlamentario.

Por último, queda por analizar la involucración de vandorismo en el golpe de 1966: la relación entre los sindicatos peronistas y el ejército.

Ya desde 1955, y sobre todo a partir de 1958, subsistió dentro de las fuerzas armadas, y particularmente en el ejército, una corriente minoritaria que discrepó con los antiperonistas más duros (los “gorilas”) con respecto a qué hacer con el sindicalismo peronista. Mientras que los “gorilas” pretendieron atomizar al movimiento obrero y erradicar de él al peronismo, los militares “organicistas” aspiraron a tutelar un movimiento sindical “unido y con sentido de patriotismo” en el que reservaban un papel central a un peronismo convenientemente domesticado. Los elementos centrales de la nueva doctrina que caracterizaba a este grupo, enfatizaron una imagen en la que se proponía a las fuerzas armadas como “columna vertebral de la nación”.

La postura de las 62 Organizaciones, y en particular del vandorismo, frente a los postulados de los “organicistas” fue ambivalente:

- Por una parte, los dirigentes peronistas redescubrieron rápidamente ingredientes de la ideología del movimiento que resultaban consonantes con los esquemas de los militares “organicistas”. Dicha consonancia se expresó tanto en las visiones de organización societal que inspiraron las estrategias de las 62 Organizaciones como en las modalidades de estructuración del movimiento obrero que procuraron implementar.

- Por otra parte, el vandorismo desconfió, con razón, de las pretensiones de los “organicistas” de que los sindicatos se subordinasen ordenadamente al Estado cada vez que éste invocase su carácter de representante del interés general frente al cual debían postergarse todas las reivindicaciones sectoriales, incluidas las de los trabajadores y sus organizaciones corporativas.

La probabilidad de que se materializara la confluencia de ejército y sindicatos no fue muy grande en 1959; Vandor y los dirigentes cercanos a él no perdieron de vista que los precursores del “organicismo” eran, en realidad, los encargados de garantizar el mantenimiento del orden en una coyuntura en la que se estaba lanzando un programa de estabilización económica, uno de cuyos efectos más importantes fue la brusca caída de los ingresos de los trabajadores. La relevancia de un eventual acuerdo entre las fuerzas armadas y los sindicatos resultó, más bien, del hecho de que dicha posibilidad se instaló como un elemento permanente, más tangible a veces y menos otras, de la política argentina. Esa circunstancia no importó tanto por los presuntos contenidos y efectos de su materialización (en definitiva la posibilidad nunca llegó a concretarse) sino por el impacto que tuvo su nunca total negación al contribuir a reforzar las predisposiciones de sindicalistas, políticos y militares que recurrentemente procuraron articular el apoyo de las masas populares a un régimen político que circunvalara las exigencias electorales de una democracia parlamentaria.

En 1966, las circunstancias parecieron más propicias:

- En primer lugar, no se trataba de una facción de los militares carente de peso, sino de aquella liderada por el oficial más poderoso de la Argentina, el general Onganía.
 - En segundo lugar, las circunstancias económicas eran más favorables, con lo cual la necesidad de medidas estabilizadoras parecía mucho menos evidente. De tal modo, la propuesta de los “organicistas” de promover la grandeza nacional favoreciendo los intereses de los asalariados resultó atractiva y convincente.
- ❖ Por cierto que la situación de la clase obrera empeoraría bajo el régimen militar, no tanto en lo económico sino en lo político: el despliegue del programa de Onganía demostraría que la apuesta de Vandor en 1966 había sido equivocada.

IV. RUPTURA DEL ESTADO DE COMPROMISO; REPLIEGUE DEL VANDORISMO Y ESTALLIDO DE LA CRISIS SOCIAL: 1967-1969

Uno de los aspectos más complicados del golpe estuvo vinculado con la inserción que tuvo en él el movimiento obrero peronista: importantes líderes

sindicales peronistas se adhirió expresamente al nuevo gobierno de Onganía y el mismo Vandor le presentó su apoyo implícito.

El apoyo del sindicalismo peronista se explicó por dos tipos de razones:

- Las primeras tuvieron que ver con el carácter, a menudo antagónico, de las relaciones entre los líderes sindicales y el gobierno radical del pueblo.
- Por otro lado, como ya se dijo anteriormente, a diferencia de 1959, ésta vez los presumibles aliados militares de las 62 Organizaciones ocupaban una posición más central dentro de las fuerzas armadas, encarnada por el general Onganía.

Los aspectos políticos del programa de la Revolución argentina contenían algunos elementos que los dirigentes sindicales no podían dejar de considerar con cierto entusiasmo; sobre todo, las propuestas de desplazamiento por un lapso prolongado de los partidos políticos, la oclusión de los canales parlamentarios y la suspensión de las elecciones igualaban al peronismo, hasta entonces proscrito, con los otros partidos. Todo ello preservando arenas reivindicativas en las cuales, en principio, organizaciones corporativas como los sindicatos podrían actuar más eficazmente.

Los primeros pasos del gobierno de Onganía no liquidaron las esperanzas del sindicalismo peronista. En los primeros momentos, las medidas más duras se tomaron en contra de los políticos y de los estudiantes y profesores universitarios que se opusieron al golpe. En cambio, los trabajadores y los sindicatos fueron tratados mucho más ambiguamente.

Pronto comenzó a quedar en claro que la tutela de los sindicatos sería ejercida benévolamente sólo a condición de que éstos aceptaran sumisamente las exigencias estatales.

Con la designación, en 1967, de Krieger Vasena como ministro de Economía y Trabajo, se confirmó el rumbo que seguiría el gobierno, en la dirección de implementar un plan económico que recogía las recomendaciones liberales. Así, se barrió con las ilusiones que podían haber mantenido hasta ese momento Vandor y la CGT, y los forzó a poner en marcha un plan de acción que incluía paros de labores y movilizaciones.

La respuesta del gobierno, fue inmediata y severa. Como las amenazas no surtieron todo el efecto deseado y la CGT dispuso la realización de los paros, el gobierno desencadenó un amplio plan represivo que forzó el repliegue de la CGT que se vio obligada a suspender el plan de acción y anunciar el levantamiento de los paros todavía no concretados.

En 1967, los efectos de la derrota sindical fueron diferentes a los de la década anterior: a diferencia de 1959, el nivel de salarios no sufrió mayormente, ya que éstos se mantuvieron prácticamente al mismo nivel que 1966. Sin embargo, esto fue acompañado, a diferencia de 1959, por lo que

apareció en ese momento como la liquidación definitiva de la capacidad de negociación y movilización de los sindicatos.

Los eventos producidos a partir de mayo de 1969 demostrarían que la victoria de Onganía había sido efímera. Además, los procesos abiertos a partir de 1969, conmovieron profundamente los pilares en los que se había basado la fórmula política en la Argentina a partir de 1955, fórmula dentro de la cual el estilo de acción sindical que fue perfilando el vanguardismo durante esos años fue un componente de suma importancia.

Cuáles fueron los atributos de dicha fórmula y cuál fue la inserción del sindicalismo peronista en ella:

- La peculiar característica del período abierto en 1955 fue que la lógica que rigió los alineamientos y los conflictos políticos más significativos fue sólo subsidiariamente determinada por los cálculos que los grupos sociales fundamentales hicieron acerca de cómo las políticas económicas alternativas beneficiaban o perjudicaban sus respectivos intereses. Las orientaciones y las conductas políticas fueron gobernadas básicamente por otro factor que sólo indirecta, y a veces contradictoriamente, se relacionó con las evaluaciones de los respectivos intereses económicos: este factor fue el peronismo.
- La cuestión del peronismo gobernó de una manera singular la política argentina durante la etapa en la cual dicho movimiento fue proscrito total o parcialmente de la arena electoral con exclusión de otros partidos. Uno de los modos en que lo hizo fue a través de la influencia que ejerció sobre la manera en que se plantearon y resolvieron los enfrentamientos entre las corrientes políticas antiperonistas que expresaron las tres posiciones en materia de política económica cuyos atributos se describieron más arriba.
- La característica principal del sistema político argentino entre 1955 y 1966 fue que los conflictos e interacciones entre las corrientes políticas y las frecuentes intervenciones de los militares en la política fueron principalmente determinados por el despliegue de la cuestión peronista, y no por los enfrentamientos entre proyectos económicos alternativos.

De todas maneras, y no obstante la precariedad de los compromisos alcanzados, la política argentina del período 1955-1966 se caracterizó por la ausencia de conflictos violentos o radicales. En ningún caso, las contestaciones populares llegaron a cuestionar seriamente el carácter capitalista de las relaciones sociales fundamentales. Esta constante se alteró a partir de 1968-1969; el intento de Onganía de eliminar las trincheras del juego político, clausurando los múltiples mecanismos parlamentarios y no parlamentarios a través de los cuales el compromiso había predominado en la sociedad y en la política argentinas, y pretendiendo canalizar y “ordenar” los diversos intereses y orientaciones sociales a través de un Estado supuestamente omnisciente y jerárquico, terminó por producir una serie de cuestionamientos a la autoridad, es decir a los fundamentos mismos de la

dominación social. Estos cuestionamiento incluyeron el desafío a la autoridad de funcionarios, profesores y maestros y a los modos y contenidos tradicionales de enseñanza en universidades y escuelas; surge la crítica al conservadurismo y la pasividad de la jerarquía de la Iglesia católica por parte de grupos de sacerdotes, quienes se autodenominaron del "Tercer Mundo".

En 1969 se profundizó un proceso por el cual comenzaron a debilitarse las complejas ligazones que, desde principios de la década, habían mantenido articulado un sindicalismo relativamente unificado con eje en el vandorismo. El poder del vandorismo entre 1959 y 1966 había resultado de su capacidad de subordinar a una lógica común a los restantes nucleamientos peronistas y no peronistas, a pesar de que éstos habían perseguido, a menudo, objetivos diferentes a los de Vandor. A partir de 1968-1969, el vandorismo perdió buena parte de esta capacidad al ser flanqueado por la derecha y desbordado por la izquierda. Asimismo, la ruptura unilateral del diálogo con los vandoristas por parte del gobierno privó casi totalmente a éstos de una de las dos patas en las que se apoyaba su estrategia, es decir la negociación con el Estado; ello desvalorizó el argumento de Vandor de que una postura menos intransigente (que la de los combativos) producía mejores resultados.

En 1968, en la práctica, pasó a haber dos CGT: la de Ongaro (obrero gráfico), que tomó el nombre de CGT de los argentinos, y la vandorista, que fue conocida como la CGT de Azopardo (por la calle donde estaba ubicada). En parte debido a la represión oficial y en parte como resultado de su heterogeneidad, durante el resto de 1968 y comienzos de 1969, la CGT de los Argentinos fue perdiendo la adhesión de la mayoría de los sindicatos que originariamente la habían integrado. Sin embargo, su discurso de oposición al régimen militar y a vandoristas y participacionistas, discurso en el que se fueron acentuando los contenidos anticapitalistas, siguió teniendo vigencia a nivel de planta y de algunas regionales del interior del país.

La insurrección popular de Córdoba de mayo de 1969, en la que se fusionaron empleados, estudiantes y pobres urbanos reverberó en distintos puntos de la Argentina durante los dos años siguientes, con la significación e importante excepción de Buenos Aires. La crisis social abierta en 1969 marcó no sólo el pasaje del régimen militar a una posición defensiva que se prolongaría hasta su derrota final en las elecciones presidenciales de 1973, sino también una profunda conmoción de la dominación capitalista en la Argentina.

La crisis consistió en la superposición de dos planos analíticamente diferenciables:

- Primero, en 1969, al igual que en 1956 y en 1963, se inició una etapa de reflujo defensivo en la cual los sectores populares demostraron nuevamente su capacidad para bloquear esfuerzos racionalizadores de la gran burguesía argentina.
- En segundo lugar, la crisis abarcó un segundo plano que se impregnó de contenidos anticapitalistas. Este plano condensó acciones

sociales que constituyeron la reacción de una sociedad sometida a un programa de racionalización impuesto autoritariamente desde arriba y excluyendo los mecanismos habituales a través de los cuales se habían ejercido presiones y formulado compromisos. Los protagonistas principales de este segundo plano de la crisis fueron sectores de la clase obrera y de la pequeña burguesía, así como también una juventud que se radicalizó invocando consignas peronistas y marxistas.

La historia del movimiento obrero argentino en la década de 1970 debe analizarse a la luz de cómo se inscribió en los dos planos de la profunda crisis iniciada en 1969.

V. CONTENCIÓN DE LA CRISIS; RETORNO AL ESTADO Y SUBSIGUIENTE DERROTA POLÍTICO-SOCIAL DEL MOVIMIENTO OBRERO: 1970 -1981

Los primeros años de la década tuvieron como protagonista central a un régimen militar en retirada, preocupado principalmente en neutralizar las movilizaciones populares desencadenadas a partir del cordobazo. Durante el quinquenio 1976-1981, en cambio, la escena política fue dominada por un nuevo régimen militar que, después de coronar exitosamente las tareas de contención de la crisis social que ya había llevado adelante el gobierno peronista que lo precedió, se lanzó a implementar una profunda reorganización de la sociedad argentina, que aspiró a “corregir las distorsiones sociales y económicas que la habían afectado desde 1943”.

La crisis del gobierno peronista condensó la pulverización de tres diferentes proyectos de superación de la crisis endémica de la sociedad argentina contemporánea: la propuesta de institucionalización política del propio Perón, la plataforma “socialista nacional” de la guerrilla peronista y el más vago programa anticapitalista del “clasismo”. Entre 1973 y 1978, estos tres proyectos se desintegraron al compás de las luchas internas del peronismo en el poder y de la dialéctica de terrorismo y represión. El movimiento sindical peronista constituyó, en los tres casos, un referente central de las respectivas estrategias políticas.

A partir de mediados de 1969, y por dos años más, el sindicalismo vandorista vivió uno de los puntos más bajos de su historia. Vandor fue asesinado en junio de 1969, generando así un vacío en la cúpula de las 62 Organizaciones que nunca volvería a ser cubierto completamente. Asimismo, los líderes vandoristas se vieron sometidos repetidamente a la tensión a la que los había enfrentado Onganía desde 1967; es decir, el no ser lo suficientemente críticos del Estado como para expresar a las cada vez más abiertas y masivas manifestaciones de oposición obrera, ni ser lo suficientemente dóciles frente a los funcionarios estatales como para hacerse merecedores de su tratamiento preferencial. Así durante 1970 y la primera mitad de 1971, los dirigentes vandoristas poco pudieron hacer frente a los numerosos episodios de rebeldía de las bases y las defecciones de

participacionistas que comenzaron a recibir dádivas cada vez más generosas de Onganía y de su sucesor Levingston, como resultado de los afanes de ambos generales de reforzar sus endeble bases políticas.

La situación cambió en buena medida en marzo de 1971, con Lanusse. Prontamente anunció el levantamiento de la veda a las actividades de los partidos políticos (incluido el peronismo) y la realización de elecciones sin proscripciones en un futuro próximo. El nuevo presidente aceleró el proceso de normalización de la CGT, lo que culminó con la elección de José Rucci como secretario general, lo que expresó un cambio significativo en la estrategia del gobierno militar que influiría decisivamente sobre los procesos en el frente sindical.

- Onganía y Levingston habían promovido a los participacionistas, lo que de rebote había, por una parte, favorecido a los dirigentes combativos y “clasistas” que expresaron la oposición más frontal al régimen militar y, por la otra, había socavado las bases de poder del vandomismo.
- En cambio, Lanusse reconoció en parte la mayor legitimidad y representatividad que los dirigentes vandomistas disfrutaban con relación a los participacionistas y se dedicó, con mucha mayor selectividad y eficacia que sus predecesores, a reprimir a los sindicalistas combativos y “clasistas” interviniendo gremios y seccionales controlados por éstos y tratando de neutralizar las movilizaciones obreras que ellos promovían y canalizaban.

Recién en 1973, los vandomistas, cuando se constituyeron en uno de los protagonistas centrales de la forzada renuncia de Cámpora a la Presidencia, volverían a recuperar una posición ofensiva como la que habían disfrutado en 1965-1966.

En mayo de 1973, con el triunfo de la fórmula Cámpora-Solano Lima, el peronismo retornó al poder después de 18 años; la ambigüedad de las coordenadas políticas que enmarcaron la acción de los sindicalistas vandomistas constituyó una de las variables que caracterizaron a un contexto político de extrema fluidez. Esta fluidez se vinculó con la circunstancia de que en 1973, al igual que en 1955 y 1966, se produjo una transición caracterizada por la posibilidad de redefinición de la manera de hacer política en la Argentina.

La inauguración del gobierno peronista en mayo de 1973, sin embargo, no dilucidó la cuestión de bajo qué principio se organizaría la política argentina. Más bien desplazó hacia el interior del peronismo las pugnas en torno al predominio de principios alternativos.

A partir de julio de 1973 se abrió un período de más de dos años que sería clausurado en septiembre-octubre de 1975 cuando coincidiendo con el fracaso del plan económico propuesto por el ministro de Economía, Cafiero, los militares tomaron la decisión de dar el golpe que sería consumado en marzo de 1976. La política argentina durante dicho período tuvo dos atributos:

- En primer lugar, la interiorización en el peronismo de los conflictos manifiestos en la escena política transformó al Estado en un campo de batalla con posibilidades decrecientes de actuar sobre la sociedad y frustró el intento de institucionalización política de Perón.
- A la par, las fuerzas sociales fundamentales de la Argentina, la gran burguesía y la clase obrera organizada, fueron desplegando cada vez más abiertamente una nueva fase de sus reiteradas pugnas en torno a la distribución del ingreso.

Tanto la burguesía como la clase obrera organizada desligaron sus prácticas reivindicativas y sus conductas económicas de la suerte que pudieran correr las políticas económicas oficiales. Por cierto que este fenómeno tuvo matices diferenciales en cada uno de los dos casos.

- La gran burguesía, que se había replegado a partir del triunfo electoral del peronismo, no perdió de vista que, a partir de la vulneración del Pacto Social, se abrió el espacio para ir socavando gradualmente un programa económico vinculado a un procesos político que le resultaba ajeno y amenazante.
- En cambio, el grado de responsabilidad de los dirigentes de la CGT y las 62 Organizaciones con respecto a la suerte del régimen era mucho más elevado que el de la burguesía. No sólo porque por primera vez desde 1955 llegaba el peronismo al poder, materializando así el reclamo fundamental que los sindicalistas peronistas habían venido formulando por 18 años, sino porque, además, a partir de la forzada renuncia de Cámpora ellos recuperaron una posición de preeminencia dentro del peronismo que fue reforzada por el hecho de que Perón entabló con la central obrera su alianza principal.

La preeminencia sindical entre 1973 y 1975 alcanzó una importancia crucial en dos coyunturas en las que la CGT y las 62 Organizaciones optaron por enfatizar sus intereses reivindicativos y corporativos más inmediatos restringiendo, de tal modo, la posibilidad de estabilizar una fórmula político-económica basada en la restauración, adaptada a la nuevas circunstancias de la economía argentina, del modelo de conciliación de intereses vigente durante el primer gobierno peronista.

- La primera de las coyunturas, se extendió durante la breve presidencia de Perón, durante la cual los sindicalistas, a pesar de no cuestionar manifiestamente las exhortaciones de Perón a que apoyaran la política de ingresos de Gelbard, que apelaba a autolimitación de las demandas de obreros y empresarios, en la práctica sabotearon dicha política. Los dirigentes de la CGT libraron una subterránea guerra de guerrillas contra el ministro de Economía, que se hizo mucho más abierta a partir de la muerte de Perón y culminó con la renuncia de Gelbard en octubre de 1974.

- La segunda coyuntura fue la de segunda mitad de 1975, cuando en torno al nombramiento de Cafiero en el Ministerio de Economía se dio el último intento de contener la crisis económica y política que había estallado durante los meses previos. Desde el punto de vista de la CGT la situación era mucho más propicia que en 1973-1974. La dirigencia sindical se había constituido a mediados de 1975 en la principal, y quizás única, fuerza organizada operando dentro del peronismo. A la desaparición física de Perón y el desplazamiento del grupo asociado a Gelbard, se había sumado el colapso de las facciones fascizantes agrupadas en torno a López Rega e Isabel Perón. El predominio de los sindicalistas se reflejó en el hecho de que el nombramiento de Cafiero fue impuesto por la CGT, con cuyos dirigentes el nuevo ministro había estado asociado desde los comienzos de la carrera de Vandor.

A pocas semanas de haber promovido la designación de Cafiero, la CGT liquidó en la práctica toda posibilidad de implementación del plan económico. La renuncia de Cafiero pocas semanas más tarde preanunció el que a esa altura era el desenlace inevitable: el golpe militar de marzo de 1976.

Y, precisamente, el gran ausente en marzo de 1976 fue el movimiento sindical peronista. Durante el período 1973-1976 el sindicalismo se enfrentó con un problema que no pudo resolver: cómo transformar su formidable capacidad defensiva y la efectividad de sus eslóganes opositoristas en una de las bases de la consolidación de un sistema político democrático y pluralista en el que el sindicalismo ocupara una posición privilegiada. Si, por un lado, el conflicto político durante esos años se trasladó al interior del peronismo, por el otro, a partir de 1974 los conflictos sociales fundamentales se fueron externalizando en un Estado que, gradualmente, perdió la capacidad de regularlos.

El diagnóstico de los militares en 1976 difirió radicalmente del de sus colegas de una década atrás. El desafío de la guerrilla y la aguda crisis social que durante varios años se superpuso con aquel desafío, fueron interpretados como la manifestación de una sociedad enferma (y, por lo tanto, sin defensas frente a la penetración del virus subversivo) cuyos orígenes se remontaban a 1945, e incluso a 1930. Dentro de esta visión el populismo y el desarrollismo modernizante aparecieron como las dos caras de una misma moneda.

Hasta 1955 una serie de obstáculos había impedido que la ideología liberal llegara a ser hegemónica dentro de las fuerzas armadas. A partir de 1955, los liberales y la corriente militar predominante habían compartido la ilusión, prontamente desechada, de la posibilidad de consolidar un régimen partidario estable que excluyera al peronismo.

La ideología liberal fue adoptada sin dilaciones y con aparente consenso, por los militares argentinos en 1976. La visión de los liberales, profundamente reaccionaria pero a la vez radicalmente transformadora, encontró oídos mucho más receptivos dentro de los cuadros de las fuerzas armadas. Éstas, a diferencia de 1966, no sólo se habían enfrentado cotidianamente con el riesgo de la lucha antiguerrillera, sino que además, y fundamentalmente, las

consignas guerrilleras se les habían aparecido peligrosamente superpuestas con manifestaciones de activación popular que, como nunca antes en la historia argentina, habían puesto en cuestión los fundamentos mismos de la dominación capitalista.

El espectro de políticas con que se atacó el “problema sindical” fue de una amplitud y una intensidad inusitadas en la historia argentina. Los capítulos principales de estas políticas fueron: a) un plan de depuración que abarcó principalmente a dirigentes intermedios y activistas obreros a nivel de las plantas, a menudo sobre la base de listas confeccionadas por las mismas firmas; b) la disolución de la CGT y la prohibición de las 62 Organizaciones; c) la eliminación de los mecanismos de negociación colectiva de salarios y condiciones de trabajo; d) la drástica reducción del poder económico de los sindicatos a través de la transferencia de las “obras sociales” al Estado; e) una estrategia económica que deliberadamente redujo el dinamismo del sector industrial como motor del crecimiento económico, y f) la suspensión indefinida de las elecciones.

Los efectos de las políticas oficiales sobre la clase obrera y el movimiento sindical hasta 1980 fueron significativos. La capacidad de protesta y el grado de solidaridad de la clase obrera fueron reducidos significativamente. A partir de 1980 un nuevo componente, no deliberado, fue sumando su impacto a las políticas enumeradas arriba. El incipiente fracaso del programa económico gubernamental y la crisis que se abrió a partir de las primeras manifestaciones de dicho fracaso causaron un pronunciado incremento de la tasa de desocupación, que se había mantenido a niveles reducidos durante los primeros cuatro años del gobierno militar.

➤ 50 AÑOS DEL MOVIMIENTO OBRERO URUGUAYO

LUCÍA SALA DE TOURON
JORGE E. LANDINELLI

I. LAS PRIMERAS ORGANIZACIONES OBRERAS

La primera organización estable de los trabajadores uruguayos surge en 1870, cuando se funda la Sociedad Tipográfica Montevideana.

El limitado desarrollo industrial permitió el surgimiento de una incipiente burguesía nacional, que ya en 1879, nucleada en la Liga Industrial, exponía una ideología nacionalista en materia económica y formulaba críticas al modelo agroexportador dominante.

En sus inicios la organización obrera experimentó dificultades provenientes del escaso número de asalariados, de la dispersión en talleres pequeños de la mayoría de los trabajadores, de la sistemática represión que sufrieron bajo los gobiernos oligárquicos.

La organización sindical obrera nace originariamente impulsada por inmigrantes, en muchos casos veteranos de las grandes luchas sociales europeas, en su mayoría de orientación anarquista. Entre 1871 y 1872 se organizó una efímera sección de la Asociación Internacional de Trabajadores. En 1896 la Federación Regional del Uruguay convoca su Primer Congreso Obrero.

En la década siguiente estallaban las primeras huelgas. En esta fase el proletariado no participaba como tal en la vida política del país y como la mayoría absoluta de sus habitantes estaba excluido incluso del derecho al voto. Las corrientes anarquistas dominantes en las organizaciones obreras predicaban el “apoliticismo”. No obstante, la clase obrera, como la mayoría de las capas medias sobre todo urbanas que ya constituían una parte importante de la población, se oponían al gobierno oligárquico y estaban objetivamente interesadas en la democratización del aparato estatal.

Los gobiernos de la época, que eran expresión de la alianza del gran capital extranjero, el comercio importador y exportador y distintos sectores de estancieros, especialmente los grandes latifundistas, incluyendo a aquellos que representaban todavía relaciones de producción precapitalistas, reprimieron en forma sistemática los conflictos obreros, pero la organización avanzó desde 1900, cuando repercuten en el país las luchas de los trabajadores argentinos.

Es el comienzo del período de auge del anarquismo y del anarcosindicalismo, que se extenderá hasta fines de la segunda década, manteniendo de manera excluyente el control de las centrales sindicales en el país. La gravitación de la ideología anarquista aumentó con la llegada de numerosos dirigentes que abandonaban la Argentina ante la fuerte persecución.

El desarrollo del movimiento sindical objetivamente se ve favorecido durante la primera presidencia del líder de la corriente popular del Partido Colorado, José Batlle y Ordóñez (1903-1907), que desde su precedente prédica política se había opuesto a la represión del movimiento obrero y declaraba la necesidad de atender a su importancia creciente en la vida nacional. Abatió decididamente los niveles de represión y, en 1904, en instrucciones a la policía, reconocía el derecho de huelga y prohibía la intervención policial, excepto para garantizar el derecho al trabajo.

Desde 1903 la primera administración batllista marca ya el inicio de un proceso a lo largo del cual la oligarquía agroexportadora estrechamente vinculada al capital inglés perderá la hegemonía política, si bien conserva un papel decisivo en la economía, al mantener en sus manos, en un país fuertemente dependiente del mercado exterior, la producción y exportación de derivados de la ganadería, que constituían el 90% de las exportaciones.

II. EL MOVIMIENTO SINDICAL EN LA ÉPOCA BATLLISTA

La conversión de la organización sindical en un verdadero “partido apolítico” anarquista dificultó la incorporación a los sindicatos de masas obreras y sobre todo la educación política del proletariado. Generalmente la huelga declarada sin análisis previo de las reales condiciones, convertida en disputa con importantes sectores obreros que no adherían a ella, aparecía como un método inconducente para estructurar organizaciones de masas.

Paralelamente, la clase obrera uruguaya no sólo luchaba en la etapa por sus reivindicaciones sino que brindaba solidaridad a otros movimientos proletarios y populares particularmente de Argentina, España, a la primera Revolución rusa, en 1905, a la mexicana y sobre todo a la Revolución de octubre.

Las concepciones dominantes del anarquismo y anarco-sindicalismo y el socialismo reformista no contribuían sin embargo a la conformación de una corriente obrera revolucionaria.

Enfrentando el batllismo (principalmente durante el segundo gobierno de Batlle) a la vieja oligarquía y con la oposición de la Unión Industrial, aparece ante las masas como el defensor de las conquistas inmediatas de los trabajadores. Incluso logrará cooptar a un grupo significativo de intelectuales y algunos líderes obreros anarquistas.

- ❖ Era imprescindible para su política, que el batllismo mantuviera la hegemonía política e ideológica sobre sus clases de apoyo y aliados, pero también sobre la mayoría del proletariado. La ideología del batllismo combinaba clásicas fórmulas evolucionistas y conciliatorias, negaba la lucha de clases, ponía énfasis en el papel de las reformas sociales mediante la acción de un Estado tutelar, tendía a escindir en la conciencia de los trabajadores su condición de ciudadano de la de asalariado.

La lucha de la clase obrera alcanzará desde 1917 niveles desconocidos en el país. Ante la severa represión, se comienza a ceder. A fines de 1918, nuevamente se reinician las huelgas. La lucha se mantendrá hasta durante 1919. A comienzos de ese año en Argentina se desarrollará la famosa “Semana Trágica” que en Montevideo es acompañada por grandes manifestaciones de solidaridad.

III. EN LA COYUNTURA CRÍTICA DE LA PRIMERA POSGUERRA

La desocupación se extendía. Volvió a correr sangre, los locales sindicales fueron clausurados y fueron muchos los detenidos. El gobierno de Feliciano Viera deportaba a los dirigentes y aun a simples huelguistas. En el año 1919 fue la época de mayor influencia de la FORU.

Fue en este período de intensa lucha cuando se produjo un deslinde de posiciones en el Partido Socialista y entre los anarquistas y anarcosindicalistas.

IV. LA MOVILIZACIÓN SINDICAL FRENTE A LA CRISIS Y LA DICTADURA

La crisis se acentuó al comienzo de la década de los veinte, cuando se hicieron sentir los efectos de la que afectaba al capitalismo, en particular a los Estados Unidos. La dependencia del país del mercado exterior, incluyendo el de capitales, se mostró en toda su crudeza.

Recién a partir de 1924 el país iniciará una etapa de recuperación económica: crece en el país la masa de asalariados de la industria, la construcción y el transporte, y culmina una etapa en la ampliación del aparato estatal, que desde fines del siglo XIX multiplica en dos veces y media su personal.

Los efectos de la gran depresión se harán sentir sobre todo desde 1930 y pondrán de relieve la crisis de estructura de la economía uruguaya.

La clase obrera uruguaya había salido en su conjunto del período inmediatamente posterior a la primera guerra, con una experiencia muy superior a la acumulada en toda la etapa formativa anterior. Sin embargo, la dirección del movimiento obrero uruguayo estaba dividida. Los “anarquistas puros” y gran parte de los “anarco-sindicalistas” abandonaron su inicial adhesión a la Revolución rusa ya desde 1923. En la dirección del movimiento obrero uruguayo existían oposiciones y antagonismos en relación a la definición de la táctica y de las formas de conducción de las luchas. Sólo un grupo muy pequeño de sindicatos se mantuvo junto a la vieja FORU, cuya influencia, desde entonces, decayó. De ella se desprendieron, en medio de duras confrontaciones, sindicatos que respondían a la dirección del naciente Partido Comunista y a grupos anarco-sindicalistas que mantenían una adhesión muy llena de reticencias a la Revolución rusa.

En 1923, nació la Unión Sindical Uruguaya (USU) en cuya dirección tuvo una ligera mayoría el anarco-sindicalismo. En 1928 se constituye el Bloque de Unidad Obrera en el interior de la USU; la dirección de la USU expulsa de la central a los sindicatos integrantes del Bloque y en respuesta la reunión de un Congreso en 1929 da nacimiento a la Confederación General de Trabajadores del Uruguay (CGTU), en cuya dirección eran mayoría obreros comunistas, aunque aliados a otros de distintas orientaciones.

Desde 1928 funcionaba en Montevideo un secretario sindical latinoamericano vinculado a la Internacional Sindical Roja, que preparó la reunión, en 1929, del Cuarto Congreso Sindical Latinoamericano, el cual con amplia participación, dio nacimiento a la Confederación Sindical Latinoamericana. Esta organización regional desempeñó un importante papel en los años siguientes en el impulso a la organización sindical en el continente.

- Una peculiaridad del período es que se incorporan a la lucha popular de manera más o menos consecuente importantes sectores estudiantiles e intelectuales y conjuntamente se desarrollan sólidas corrientes antiimperialistas.

En 1933 el golpe de estado protagonizado por quien era presidente constitucional, Gabriel Terra, dio inicio a una dictadura que puso fin momentáneamente a una etapa de agudas contradicciones entre las clases y fracciones de clases dominantes. El sistema de dominación dictatorial pasa a responder a los intereses de las clases y segmentos del gran capital agroexportador y los terratenientes.

En medio de una práctica fuertemente represiva la dictadura escindió a los partidos tradicionales en sus fracciones dictatoriales y opositoras. Sin embargo, fue difícil conformar un bloque opositor homogéneo y no llegó a plasmarse una estable alianza política alternativa, aunque hubo jornadas comunes de lucha por la restauración de la legalidad democrática.

La debilidad de la clase obrera era ante todo el fruto del nivel de desarrollo del país, de su composición de clases, de la capacidad hegemónica de la burguesía nacional. Esto permitió una salida de la dictadura, a través de gobiernos de transición, a lo largo de los cuales iba a producirse el desplazamiento gubernamental de las fracciones políticas que expresaban mejor al gran capital fundamentalmente agroexportador, cuestión que se procesaría sin afectar económicamente a los terratenientes.

- Si una clase obrera débil y dividida y capas medias reformistas no fueron capaces por el momento de dar otro rumbo a la salida de la dictadura, su acción como impulsores del movimiento popular fue decisiva.

V. EL DESARROLLO DE LA CLASE OBRERA Y EL NEOBATLLISMO

En la década de los cuarenta la clase obrera crece numéricamente y experimenta un proceso de diferenciación en su interior, en el contexto de una sociedad donde se incrementan los asalariados no proletarios y que sufre en su conjunto cambios importantes.

Existen diferencias muy marcadas de nivel de vida, concepciones, etc., entre los asalariados no proletarios y la clase obrera. Entre las distintas capas de los primeros, incluso si exceptuamos el estrato más alto, es también muy grande la heterogeneidad. No obstante que en el período las capas media dependientes irán adoptando formas de organización y de lucha similares a las del proletariado, dominan entre ellas las concepciones propias de su clase y son grandes las dificultades para que unan su acción con lo obreros y aún entre sí.

Se acelera el desarrollo de la burguesía industrial que se diferencia notablemente. De una masa de burguesía industrial media y pequeña, se desataca una capa de grandes capitalistas, cuyos intereses recientemente se entrelazan con el capital comercial y bancario, invierten en la agricultura y aun en la ganadería y que pasan a gravitar decisivamente en la vida política. Un sector más estrecho de la gran burguesía entrelaza sus intereses con el capital norteamericano, que aunque en grado mucho menor que en otros países de América Latina, invierte en el país.

- Las transformaciones experimentadas en la clase obrera y en la estructura de clases del país, son el fruto de las que ha sufrido la economía. El Uruguay es ya a mediados de siglo un país industrial-agrario.

El ascenso del nivel de lucha y organización de la clase obrera desde fines de la década de los treinta será en primer lugar el fruto de su capacidad de reacción frente a durísimas condiciones de vida y trabajo, cuando ya ha avanzado el proceso de democratización del país, del cual ha sido y seguirá siendo uno de sus protagonistas fundamentales.

En materia de seguridad social y condiciones laborales, se sancionaron a partir de 1940 algunas leyes importantes. Avanza la organización sindical, se refuerzan los sindicatos existentes, se levantan muchos nuevos, de empresa, rama o industria que se integraron en federaciones nacionales. La organización se amplió a sectores no proletarios de la industria, el comercio, la banca privada y más tarde a funcionarios estatales.

Nace en 1942 la Unión General de Trabajadores (UGT). En su creación y posterior dirección tuvieron papel decisivo los militantes del Partido Comunista, gremialistas independientes y de los partidos tradicionales, integrantes del Partido Socialista y de otros grupos menores.

- Desde su constitución se dio impulso a la organización sindical, que se amplió decisivamente, se desarrollaron grandes luchas por reivindicaciones generales y sectoriales, algunas de las cuales se plasmaron en leyes. La dirección de la UGT procuró entrelazar permanentemente la lucha reivindicativa con los grandes temas políticos, en particular con la consolidación de la democracia política en el país y la solidaridad con quienes luchaban contra el fascismo.

La dispersión de las corrientes que constituían la izquierda política y la división del movimiento sindical, favorecieron al proceso de hegemonización político-electoral, de los herederos del viejo batllismo. La política social de los gobiernos neobatllistas no fue sino fruto de la necesidad de imponer una nueva forma de hegemonía sobre los sectores populares.

La represión combinada con el reformismo, una vez fracasado el proyecto de gravitar directamente corrientes oficialistas en el movimiento sindical, el intento de imponer la reglamentación sindical y el fomento de la división, serán los instrumentos para limitar la eficacia del sindicalismo. Pese a todo el sistema de organizaciones laborales siguió siendo independiente de los partidos que representaban a las clases dominantes.

La etapa que se extiende desde la inmediata posguerra hasta mediados de la década de los cincuenta, cuando se manifiestan crudamente los efectos de la crisis de estructura en el país, es de importantes luchas y conquistas obreras, de extensión de la organización de sindicatos incluyendo los asalariados no proletarios y el inicio de agudos conflictos de los trabajadores rurales.

Es la época del auge del nacional-reformismo neobatllista que logra hegemonizar ideológica, política y electoralmente a amplios sectores populares incluyendo a la mayoría de la clase obrera.

- En 1955 el movimiento sindical entra en una nueva etapa tanto por el nivel de las luchas cuanto por el de organización y los avances de la unidad.

Pese a todas las dificultades y debilidades, el Uruguay en el que iba a expresarse con toda violencia la crisis de estructura tenía un proletariado cada vez más organizado y combativo, una organización sindical independiente de los partidos de la burguesía y dentro de la cual avanzaban las tendencias unitarias y se creaban las condiciones para la unidad política.

VI. LA CRISIS ECONÓMICA DEL URUGUAY Y EL MOVIMIENTO OBRERO

En la evolución del movimiento obrero uruguayo, 1958 es un año particularmente significativo, en tanto los acontecimientos que lo distinguen tendrán una trascendencia inmediata para la concreción de una política sindical de mayor alcance y amplitud en el plano de las alianzas sociales, ubicada en la perspectiva de la construcción de una central única de trabajadores.

A partir de 1955, la crisis económica se manifestó en baja de la producción industrial, disminución de las exportaciones, caída de sus precios e incremento de los saldos negativos del comercio exterior, agudizado por el deterioro de los términos de intercambio, y un creciente endeudamiento financiero con la banca internacional, especialmente norteamericana. En esos momentos el capitalismo mundial se recuperaba y daba inicio a un nuevo ciclo expansivo. En ese cuadro de relaciones de dependencia del capitalismo uruguayo se acentuaron y aparecieron con nitidez los límites estructurales del modelo industrialista, impulsado en circunstancias adecuadas por las políticas gubernamentales del nacional-reformismo.

- Si en sus orígenes el proyecto batllista, que en su momento de apogeo asumió rasgos redistributistas y arbitrarios ante el conflicto social, fue incapaz de enfrentar el agotamiento de las coyunturas económicas favorables a su consolidación, en 1955, cuando con la guerra de Corea desapareció la última circunstancia propicia a su desarrollo, asentado fundamentalmente en las óptimas condiciones del mercado mundial, el esquema político de los grupos industriales nacionales, representados por el neobatllismo predominante, apareció directamente cuestionado.

Este proceso de debilitamiento agudo y constante de la economía uruguaya, cuyas sintomáticas dificultades se hicieron notorias desde 1955, cubrirá con ritmo acelerado toda la década de los sesenta y se profundizará después todavía más, hasta alcanzar límites insospechados.

Los múltiples conflictos que se dan en esos años de defensa del salario y de las posibilidades de consumo del trabajador, lograron en buena medida mantener un cierto equilibrio en los niveles de ingreso. Después de un período de ascenso y estabilidad, hasta 1955, comienza una evolución oscilante. A partir de 1966 comienza a expresarse una tendencia marcadamente descendente, la cual desde 1968 será pronunciada e implicará un corte cualitativo en el proceso, al ser sustituidos los tradicionales mecanismos de negociación de las remuneraciones por una intensa intervención gubernamental en el mercado de trabajo.

VII. LA UNIFICACIÓN DEL MOVIMIENTO OBRERO

En su desarrollo histórico a lo largo del siglo, el movimiento obrero uruguayo había madurado un conjunto de experiencias organizativas y políticas que le pondrían en condiciones de abordar positivamente el acelerado proceso de unificación que culmina a mediados de la década de los sesenta con la creación de la Convención Nacional de Trabajadores (CNT). La base material para ello radicaba en la consolidación de la organización sindical en los centros neurálgicos de concentración proletaria urbanos, su extensión a la totalidad de las ramas industriales, a la mayoría de los sectores productivos y de servicios estatales, a importantes nucleamientos de capas medias

dependientes y de profesionales asalariados, así como a una parte aún limitada pero sustancial de los trabajadores rurales.

En su autonomía política e independencia se sustentará la gravitación del movimiento obrero en las posteriores conmociones críticas del sistema político uruguayo, cuando logrará ubicarse como eje de la construcción de una importante fuerza social unificada en torno a un programa de cambios alternativos.

La UGT, que había nacido a principios de la década anterior con el apoyo masivo de la gran mayoría de los más importantes sindicatos, no había logrado llevar hasta sus extremos el proceso de unificación iniciado. Igualmente, su trayectoria fue de fundamental importancia en la consolidación de aspectos básicos y definitorios para el desarrollo de la conciencia de la clase obrera uruguaya.

- La postulación práctica de un sindicalismo de masas, la implantación de efectivos mecanismos de democracia sindical, la formulación de postulados programáticos de fondo, entrelazados con los objetivos inmediatos de los trabajadores, la ampliación de la vida sindical a sectores específicamente no proletarios, la definición del papel relevante de las organizaciones laborales en la defensa de las libertades democráticas y derechos constitucionales, el consecuente internacionalismo y su política solidaria, fueron rasgos definitorios de la UGT que constituyeron un hito ineludible para la posterior estructuración de la unidad de la clase obrera.

Surge en 1951 la Confederación Sindical de Uruguay (CSU), el más serio intento patronal por impulsar un sindicalismo “amarillo” dirigido a la paralización de la movilización obrera. En pocos años deja de existir.

La autodisolución de la UGT en 1959 facilitó la integración de un Congreso Constituyente de la Central Única, el cual inició el rápido proceso tendiente a la unificación sindical que culminaría exitosamente en poco tiempo.

Así, en un marco de elevación cuantitativa del número de acciones sindicales, se produjeron cambios cualitativos en las modalidades metodológicas, hasta entonces frecuentemente pasivas, de la participación sindical, que se transformaron rápidamente mediante la incorporación activa, responsable y disciplinada, de masas de trabajadores.

En abril de 1961 el proceso de unificación orgánica recibió un impulso decisivo cuando fue acordada la creación de la Central de Trabajadores del Uruguay (CTU). No reunía en su seno a la totalidad del movimiento obrero uruguayo, pero su presencia dinamizó en corto tiempo la evolución hacia una central única.

En noviembre de 1964, pasando a una etapa superior de la unidad orgánica, se constituye como organismo de coordinación entre las organizaciones filiales de la CTU y un buen número de importantes sindicatos que se encontraban fuera de ella, la Convención Nacional de Trabajadores (CNT), la cual ya al constituirse abarcaba a la casi totalidad del movimiento sindical. El propósito de la CNT no se limitaba a la estructuración unitaria del sindicalismo uruguayo; de alguna manera pretendía constituirse en un polo de atracción para articular la acción conjunta de todos los sectores sociales afectados por la crisis económica del país.

- Es 1966 el año en que se consolida la unidad sindical, por cuanto se llega a la culminación del proceso mediante la transformación de la CNT, antes coordinadora de la acción sindical, ahora central única de los trabajadores organizados en el Uruguay. La CTU desaparecería para integrar todos sus organismos filiales en la Convención Nacional de Trabajadores.

La Convención Nacional de Trabajadores se estructuró nucleando a una serie de organizaciones sindicales de larga experiencia, particularmente concentradas en la industria manufacturera y en las empresas estatales. Pero si bien tenía en los sindicatos obreros a su sector más pujante y combativo, de más asentada tradición de lucha y con arraigados principios clasistas, la amplitud de la central le convertía en un instrumento de concreción orgánica de la política de alianzas de la clase obrera en el plano social, particularmente hacia las capas medias asalariadas, así como estudiantes universitarios y colegios profesionales con los cuales mantenía relaciones fraternales.

VIII. EL MOVIMIENTO OBRERO EN LA CRISIS POLÍTICA DEL URUGUAY

Hasta 1986 el Uruguay contemporáneo se caracterizó por el predominio de una serie de mecanismos democráticos de dominación articulados en una institucionalización relativamente estable que logró gozar de un sólido consenso popular. En los hechos, la vida política uruguaya mantenía, pese a sus limitaciones y deformaciones, aspectos sustanciales de la mejor tradición democrática del país, asentada en el arraigado civilismo, en la laicidad que impregnó sus instituciones y la gestión gubernamental por lo menos desde la primera época batllista, y en la estimulante influencia intelectual de las vertientes más avanzadas del liberalismo europeo.

En noviembre de 1967 asume la presidencia Jorge Pacheco Areco (tras la muerte del presidente Gestido). Pacheco Areco sería el gestor de un profundo viraje en las modalidades de dominio político tradicionales, al dar inicio a una fase en la cual irían siendo relegados aspectos sustanciales de la institucionalidad democrática uruguaya, para ser sustituidos por una acción violentamente represiva y discrecional, anticonstitucional en su forma y regresiva en su contenido.

La coyuntura por el ascenso de Pacheco Areco a la presidencia de la República, entre la manifestación del resquebrajamiento institucional del

sistema político y la instauración de un régimen dictatorial abierto, constituyó una etapa signada por una violencia hasta entonces ignorada en las luchas sociales del país, de condensación crítica de sus contradicciones, en la cual se desvaneció la presunta realidad sin igual del Uruguay liberal en el contexto latinoamericano.

El gobierno de Pacheco Areco puso en práctica un proyecto estabilizador especialmente destinado a frenar el proceso inflacionario, mediante una política asentada en los mecanismos monetarios, en el mantenimiento del tipo cambio y, fundamentalmente, en la contención salarial, en tanto era en los niveles de salarios donde ese proyecto focalizaba el principal elemento distorsionante de la economía, ubicando por ello en las demandas de los sindicatos, el problema principal a enfrentar en el plano político.

De acuerdo a esa concepción, el 13 de junio de 1968 se decretó la implantación de la “medidas prontas de seguridad” (modalidad del estado de sitio), con suspensión del derecho de huelga y demás derechos sindicales previstos constitucionalmente, utilizando como fundamento para ello el pretexto de enfrentar un presunto clima de inseguridad pública generado por un serie de conflictos de origen gremial.

Claramente el pachequismo significaba una violenta revisión de los lineamientos políticos en los que se había apoyado la legitimación consensual del Uruguay liberal. El Estado no consideraba ya en términos arbitrarios su relación con los trabajadores, sino que entendía que en ellos, en su movilización y demandas, se individualizaba el principal factor de inestabilidad económica. Comenzó de esa manera una coyuntura donde la acción de los poderes estatales se dirigió directamente a la paralización o abierta liquidación de la organización de los trabajadores, caracterizada por una represión sin precedentes y de agudización inédita de la lucha de clases. La gestión de Pacheco Areco propugnó así una práctica autoritaria que se encubría en la formulación de una nueva concepción del poder político, en lo fundamental articulada en torno a la defensa de los sectores privilegiados de la sociedad contra los asalariados.

- Comenzó a gestarse la crisis orgánica del modelo de dominación liberal, madurada en la intensa lucha de clases característica de ese período. La dirección impuesta a la sociedad dejó de ser aceptada por los trabajadores movilizados en defensa de sus intereses. La crisis de hegemonía de la clase dirigente, de la orientación que imprimía al desenvolvimiento social, se comenzó a manifestar en el radical rechazo a sus lineamientos por parte de quienes antes le habían dado su apoyo y legitimación política. De esa manera se fue desarrollando en medio de las luchas sociales la ruptura del ordenamiento político tradicional, ante un Estado en manos de una fracción de la burguesía que renunciaba a las antiguas modalidades de dirección política y pasaba a apoyarse casi exclusivamente en la coacción desenfundada.

La acción del movimiento obrero y su central única, la CNT, se orientó a la articulación de una serie de objetivos que posibilitaran la derrota de la política del gobierno, en condiciones particularmente difíciles: funcionamiento clandestino de gran parte de las direcciones sindicales, prohibición de toda actividad gremial, derechos públicos suspendidos, miles de sindicalistas presos.

Cuando el Poder Ejecutivo buscaba justificar su accionar represivo claramente contrario a las disposiciones legales, en la necesidad de enfrentar el “caos subversivo” y el “desorden sindical”, defendiendo el “orden y la tranquilidad tradicionales”, tratando de obtener el apoyo de las zonas más atrasadas y menos conscientes de la población, los trabajadores asumían como problema definitorio la defensa intransigente de los derechos democráticos. Su objetivo táctico fundamental era aislar la política gubernamental, desentrañar su contenido ante las grandes masas y, consecuentemente, impedir su consolidación, lo cual no podría resolverse sino en medio de un enfrentamiento que por su propio carácter debía ser sostenido y prolongado.

- Este enfrentamiento antagónico entre gobierno y sindicatos recorre todo el período como una constante en la cual se condensaban las más agudas contradicciones que emergían del agotamiento de la estabilidad del sistema político-ideológico.

Desde 1968 el desarrollo de las luchas sociales en el Uruguay había ido asumiendo un carácter cada vez más marcadamente político, por cuanto la movilización sindical, que abarcaba a la inmensa mayoría de los sectores subalternos organizados, se ubicaba, en la perspectiva de los cambios estructurales y la defensa de la democracia, como el principal factor catalizador de la convergencia de las masas que, de una u otra manera, se veían fuertemente golpeadas por la crisis e impulsadas a la movilización política.

Cientos de huelgas y conflictos se suceden en estos años; decenas de paros generales y acciones solidarias, grandes movilizaciones que pautan toda la etapa convirtiendo a la clase obrera uruguaya e la protagonista principal u columna vertebral de esas luchas.

Por un lado, estas huelgas se dirigieron a enfrentar aspectos básicos de la política del gobierno y a evidenciar sus implicancias con intereses económicos claramente singularizados, al servicio de los cuales se ponía el aparato de Estado. Por otra parte, se trató de conflictos en los cuales la defensa de la democracia y de la organización sindical siempre pasó a primer plano.

La Iglesia Católica incursionaba por primera vez en la historia contemporánea del país en manifestaciones que la ubicaban en el centro de la problemática social con una tonalidad sensible al agravamiento de las condiciones de vida populares, al incremento acelerado de la pobreza y a la negociación de las libertades individuales, todo lo cual las autoridades eclesióásticas ubicaban como motivantes principales de una condenable violencia pública.

En ese marco eclosivamente crítico, el proceso en el interior de las fuerzas armadas uruguayas fue indudablemente complejo. En ellas se comprobaba básicamente la existencia de dos tendencias antagónicas, una, predominante en la oficialidad de esa época, fiel a las tradiciones civilistas que habían caracterizado la trayectoria de la institución armada a lo largo del siglo, otra, de escaso predicamento y arraigo en ese momento, con inclinaciones autoritarios y veladas tendencias fascistas.

Pese al predominio de esa orientación estrictamente civilista, la influencia norteamericana era creciente en las fuerzas armadas y había dado impulso a un fuerte ánimo anticomunista en la oficialidad uruguaya, estimulando su papel frente a la subversión en torno a la ideología de “seguridad nacional”, la cual facilitó y fundamentó su inmediata incorporación y compromiso.

- La fase histórica inaugurada el 13 de junio de 1968 con el decreto de medidas de seguridad, con la inmediata articulación de una sistemática política antiobrera a partir de la implantación de la congelación de salarios y el desenfrenado impulso represivo contra la organización de los trabajadores, significó una transformación profunda de la fisonomía política del Uruguay.

IX. EL MOVIMIENTO OBRERO Y LAS TRANSFORMACIONES DEL CUADRO POLÍTICO

Tres años de complejas confrontaciones políticas y sociales definieron un nuevo perfil en la situación uruguaya. La persistente crisis económica del país se tornó en profunda crisis política, donde la sociedad entera se vio afectada estructuralmente por la afloración de sus contradicciones antagónicas. Las integradas normas de conducta política estatal se trastocaron rápidamente y el complejo desenvolvimiento de la lucha de clases fue plasmando una polarización social que se sustentó básicamente en las modificaciones expresas en la conciencia obrera y en la de extendidos sectores medios dependientes, que en su conjunto procesaron trascendentes avances en su organización unitaria y compromiso en torno al programa de soluciones nacionales postulado desde el ángulo sindical, el cual fue la base sobre la que se articuló la intensa movilización política de masas del período.

Lo nuevo en el panorama político uruguayo de 1971 radicaba esencialmente en el surgimiento del Frente Amplio, el cual recogió en una vasta coalición orgánica la adhesión de comunistas, socialistas, demócrata-cristianos, batllistas y nacionalistas escindidos de los partidos tradicionales, ciudadanos independientes y varios agrupamientos menores de la izquierda.

Con el Frente Amplio, en 1971, después de una década de luchas obrero-populares en la que el proletariado cumplió el papel protagónico y en cuyo marco se había procesado la radicalización de extensos sectores sociales, lo cual se reflejaba en los avances organizativos del conjunto del movimiento popular, aparecían en el Uruguay, nuevas condiciones para una amplia unidad

política que tenía por base social de sustentación la alianza de la clase obrera y de las diversas zonas de trabajadores con las capas medias de la ciudad y del campo, factor potencial de aglutinamiento de todos los sectores que de diversa manera se veían lesionados por la política gubernamental.

El Frente Amplio implicaba una modificación sustantiva del cuadro político; con él apareció por primera vez en la historia de la democracia uruguaya, una fuerza en condiciones de cuestionar el bipartidismo tradicional.

La victoria electoral la obtuvo el Partido Colorado con 682 mil votos. El Partido Nacional logró 670 mil votos. El Frente Amplio fue apoyado en la candidatura por 310 mil votantes (a su interior las listas auspiciadas por el Partido Comunista sumaban 105 mil votos y definían su principal fuerza electoral).

Algunos rasgos fundamentales de esta elección, punto nodal del proceso político uruguayo de la década, a tener en cuenta:

1) El proceso electoral se llevó a cabo en un clima particularmente irregular: medidas de seguridad, con la consiguiente suspensión de libertades públicas y derechos individuales, clausura de diarios y censura de prensa, utilización del aparato de Estado en auspicios y aliento de la candidatura oficialista, creación de un clima general de intimidación.

2) La agudización de la lucha electoral y la vigencia por primera vez del voto obligatorio establecido en la Constitución de 1966, llevó a una movilización electoral de masividad inédita: en 1971 votó el 98% de la población en condiciones de hacerlo.

3) Como nunca antes en otra elección nacional uruguaya, se notó la existencia de una gran masa de votantes fluctuantes o indefinidos en el transcurso de la campaña electoral.

4) Los resultados electorales demostraron la permanencia de profundos desniveles entre el interior y Montevideo. En la capital, escenario primordial de las luchas sociales del período, el Frente Amplio obtuvo el 30% de los votos, pero su promedio nacional fue apenas superior al 20%.

5) En cifras absolutas la izquierda sacó tres veces más votos que lo acumulado en 1966. En términos porcentuales la izquierda en su totalidad nunca había logrado superar el 10% de los votos y en 1971 obtenía un 20%.

6) Los resultados electorales demostraron asimismo, que el Frente Amplio no logró cubrir las expectativas que había creado en ese terreno, y su crecimiento entre las masas de indecisos definida en junio, fue casi nula.

X. EL DERRUMBE DEL SISTEMA DEMOCRÁTICO

La debilidad intrínseca del régimen presidido por Juan María Bordaberry (producto de su endeble legitimación electoral y del frágil apoyo político con que contaba) llevaba implícita la acentuación de los rasgos autoritarios en que había derivado el proceso crítico del Estado uruguayo. Las inocultables tendencias dictatoriales del nuevo gobierno pretendían una justificación política en la aducida imposibilidad de orientar, de acuerdo con los mecanismos demoliberales, a un país perturbado por los enfrentamientos sociales, la incapacidad de preservarlo de sus enemigos internos (la clase obrera y el movimiento popular) en el marco de la institucionalidad constitucional. La tendencia regresiva manifiesta en ese pensamiento no hizo más que profundizarse en la fase inmediatamente posterior a la elección nacional, caracterizada por una permanente reducción de las libertades democráticas, paradójicamente con el fundamento de defenderlas de la “amenaza subersiva”. El nuevo gobierno, aislado social u políticamente, incapaz de asentarse en un apoyo consensual de masas, continuador directo del anterior por su composición de clase y sus concepciones ideológicas, encontrará su única posibilidad de consolidación. Primero, en el decaimiento institucional, para facilitar la represión sistemática contra la oposición, luego, en la ruptura del orden constitucional persiguiendo el mismo fin. Así, el corto lapso que transcurre entre el ascenso de Bordaberry, en marzo de 1972, y el golpe de Estado del 27 de junio de 1973, es una etapa de sobrevivencia del sistema político apenas en algunos de sus aspectos formales, de duros enfrentamiento de clases que profundizan la polarización del país en función de perspectivas programáticas radicalmente antagónicas.

Consciente de los peligros sobre las perturbadas libertades formales, el movimiento obrero desarrolla en los primeros meses de esos años una intensa movilización orientada a la defensa de los derechos democráticos, unida al reclamo de aumentos salariales.

A raíz de estos acontecimientos el gobierno de Bordaberry y los grupos de inspiración fascista, tomaron la iniciativa y alentaron el desenvolvimiento de una serie de sucesos políticos que profundizaron rápidamente los rasgos antidemocráticos del Estado uruguayo.

La rearticulación inesperada y momentánea de las relaciones de fuerza políticas estimuló los planes de liquidación violenta del movimiento popular en su conjunto, por cuanto en la práctica el “estado de guerra interno” se dirigió no solamente contra la guerrilla sino que pretendió ser usado ya en ese momento también para un ajuste de cuentas definitivo con el movimiento sindical y las fuerzas de izquierda.

El desencadenamiento provocativo de un clima de terror y violencia en que se empeñaron los grupos de la ultraderecha tenía como objetivo generar la inseguridad colectiva en la que se fundamentaba el cercenamiento de los derechos constitucionales y la concentración autoritaria del poder, así como

buscaba llevar al movimiento popular, en las peores condiciones políticas, a un enfrentamiento total.

Desde el período de gobierno de Pacheco Areco, las fuerzas armadas uruguayas, de arraigada tradición constitucionalista, de extracción en las capas medias, sin tradición en el siglo de inserción directa en el acontecer institucional, se fueron envolviendo en la lucha social y política, pasando a ser ejecutoras directas de la represión gubernamental técnicamente asesoradas y crecientemente influidas por las fuerzas represivas norteamericanas y de las dictaduras vecinas, particularmente la brasileña.

Sin una coherente definición ideológica y programática, con profundas heterogeneidades y desniveles en su interior, con una general incapacidad técnica y política para asumir la problemática estatal, la injerencia de las fuerzas armadas en el ámbito institucional está plagada de contradicciones entre sectores diferentes, Desde los ejecutores materiales de los aspectos más irracionales y repudiables de la represión, hasta los grupos que expresaban una confusa preocupación por la situación social del país, de alguna manera sensibles a la movilización popular y sus postulados.

Prontamente los mandos militares vaciaron de su contenido y propósito real las propuestas de los sectores democráticos de la oficialidad, y ello fue acompañado de una transformación radical de la inestable correlación de fuerzas en el seno de las fuerzas armadas, mediante el desplazamiento de aquellos que, aunque en forma confusa y a veces incoherente, habían adoptado una actitud objetivamente coincidente en aspectos de importancia con el programa del movimiento popular. De allí en adelante las fuerzas armadas serían homogeneizadas por la fracción ultraderechista que las pondría en posición de ejecutoras del golpe de Estado por el que pugnaban las fracciones de las clases dominantes vinculadas estrechamente al gobierno.

El período que arranca en las elecciones nacionales de noviembre de 1971 y culmina en la acción golpista de junio de 1973, fue así un lapso cargado de acontecimientos particularmente complejos en el plano social y político, indicadores de una profunda y crónica inestabilidad institucional, en la que todas las contradicciones estructurales que encerraba la sociedad uruguaya aparecieron descarnadamente.

XI. LA “CONTRARREVOLUCIÓN PREVENTIVA”

Desde 1968 la institucionalidad democrática se encaminó hacia una inexorable debacle. Su desmantelamiento paulatino se correspondía directamente con la debilidad política del régimen, con la crisis de hegemonía que en poco tiempo desembocaría en la imposición del despotismo dictatorial. Dado el desarrollo original, autónomo y clasista, del movimiento obrero uruguayo, así como su probada capacidad de movilización en defensa de sus derechos e intereses, la concreción de una política económica que suponía la abrupta reducción de los niveles de vida de los asalariados, debía apoyarse en procedimientos de marcada violencia represiva. La exacerbación de los

conflictos de clases puso en evidencia a la crisis ideológica del sistema de dominación, expresada en el abandono de la metodología liberal de gobierno y en la adopción de formas casi exclusivamente coactivas de control político como funcionamiento de la estructura de poder. Estos rasgos críticos se profundizaron en la medida en que se fue procesando la conquista de una nueva conciencia por parte de las masas, en la ardua experiencia de la lucha, al mismo tiempo que la clase obrera afirmaba su función dirigente en la fusión del movimiento popular, lo cual se traducía en una nueva configuración en el plano de la organización y definiciones programáticas de agrupamientos políticos en su conjunto y asentaba el surgimiento del Frente Amplio en 1971 como fuerza política activa, conscientemente empeñada en la batalla por la renovación del país.

En la múltiple y encarnizada batalla de esos años el movimiento popular uruguayo enfrentó amenazas y golpes reaccionarios, definió una táctica, buscó impedir el aislamiento de las grandes masas del sector más consciente de los trabajadores que procuraba consolidar una relación positiva con la totalidad de las fuerzas democráticas actuantes en el plano político. La lucha de las fuerzas trabajadoras organizadas, realizable por el desarrollo de la conciencia política de masas y por el esfuerzo consciente de sus sectores partidarios de vanguardia que ejercían la dirección del movimiento, hizo madurar una situación que podía ser definida como históricamente nueva, en la cual pasaba a primer plano la posibilidad concreta de un profundo viraje democrático para salir de la grave crisis en que se encontraba sumido el país.

- Es en la dinámica de esa agudizada lucha de clases, que impregna directamente los comportamientos políticos de toda la sociedad, cuando la fracción dominante de la burguesía uruguaya reniega abiertamente del acervo democrático tradicional y se inspira en el autoritarismo de tipo fascista para desatar una verdadera “contrarrevolución preventiva” dirigida contra las organizaciones populares. Sin contar con el consenso de los gobernados e incapaz de ejercer una real dirección ideológica, el poder sólo se podía mantener en manos del estrecho grupo social que lo usufructuaba contra la voluntad de la inmensa mayoría nacional, mediante el ejercicio indiscriminado y terrorista de la fuerza.

A pocas horas del golpe, se lleva a cabo la huelga general, de 1973, que constituyó el punto de confluencia de todos los sectores opositores al cambio fascistizante operado en la forma del Estado uruguayo, abriendo un amplio campo a las alianzas democráticas contra la dictadura. La huelga no fue suficiente para derrotar al nuevo régimen en su nacimiento, pero le produjo dificultades irreparables para su ulterior consolidación, fundamentalmente porque le quitó toda expectativa realista de obtención de una base popular de apoyo. La huelga general, signada por el heroísmo y la disciplina de la clase obrera, tuvo un impacto nacional y expresó el punto más alto del espíritu democrático del pueblo, de la unidad y fuerza del sistema de organizaciones populares, abriendo una perspectiva cierta para una lucha general, larga y difícil, asentada en un alto grado de conciencia y de acumulación de experiencias, encaminadas al derrocamiento de la dictadura.

El movimiento obrero frente a la dictadura

A diferencia del anterior golpe de Estado que conociera el Uruguay en este siglo, en 1933, los sucesos de 1973 no estuvieron prioritariamente orientados a dirimir un conflicto en el interior de las clases dominantes, como una solución de fuerza a sus tensiones fraccionales, sino que, en lo fundamental, si bien las contradicciones interburguesas eran drásticas, buscaron el aplastamiento de una fuerte oposición estructurada en torno a un enemigo externo al sistema de dominación: la clase obrera, sus estructuras organizativas y de alianzas en el plano social y político. En su forma y contenido el nuevo Estado uruguayo pasó a ser principalmente antiobrero (con un fuerte planteo anticomunista) y, a partir de ello, profundamente antiliberal (al considerar al sistema liberal como incapaz de defenderse de sus enemigos externos).

La política estatal implantada en el país pasó a distinguirse por dos rasgos básicos de tipo fascista: la destrucción de las organizaciones obreras y populares, y la anulación de la institucionalidad democrático-liberal. Fueron eliminadas de raíz las conquistas legales de los trabajadores, fueron disueltas sus organizaciones, se suprimió el derecho constitucional a la huelga y fueron anulados los contratos colectivos, los dirigentes sindicales fueron objetos de una dura persecución y muchos de ellos encarcelados por su condición de tales.

En tal contexto político el funcionamiento gremial y las relaciones obrero-patronales quedaron básicamente reguladas por el citado decreto del 4 de julio de 1973, el cual imponía restricciones absolutas a la actividad sindical y ubicaba las sanciones a su contravención en la discrecionalidad de las correspondientes autoridades jerárquicas.

Se precipitó un desmantelamiento general de la legislación protectora del trabajo formulada en las décadas precedentes. A la inestabilidad general de los trabajadores se sumó la eliminación de un bien número de leyes de protección social.

Este proceso de persecución a la organización sindical se desenvolvía sobre el trasfondo de la implantación de una nueva política económica sólo posible de realizar en el marco de un acentuado autoritarismo de Estado. El modelo económico impulsado en el país, en forma sistemática particularmente desde mediados de 1974, se sustentaba en la necesidad de dirimir drásticamente el característico conflicto político entre los sectores en pugna antagónica por la participación en el ingreso nacional.

Es indudable que la contradicción entre los asalariados y el modelo económico impuesto no ha hecho más que profundizarse en estos años. Los ingresos disponibles y el nivel de consumo de los trabajadores han decrecido constantemente.

Breve mención específica al contenido y desarrollo de las instancias ensayadas en el transcurso de los últimos años:

a) En septiembre de 1973 se presenta un proyecto para intentar regularizar el funcionamiento de los sindicatos en el cual se disponía que serían reconocidas por las autoridades públicas aquellas organizaciones que presentaran su solicitud de reconocimiento avaladas por la suscripción del 10% de los trabajadores de cada empresa de la rama respectiva. La intención manifiesta era alentar la formación de nuevos sindicatos pro-patronales en sustitución de aquellos que habían sido filiales clasistas de la disuelta Convención Nacional de Trabajadores.

b) En febrero de 1977 el gobierno uruguayo instituyó por decreto las Comisiones Paritarias por empresa para el sector privado de la economía. Estas comisiones se integrarían por delegados patronales y de los trabajadores, siendo la única instancia que las autoridades reconocerían para resolver en materia de relaciones laborales. Serían órganos de diálogo, en particular sobre cuestiones de productividad y licencias, quedando al margen de sus posibilidades de negociación las cuestiones de índole salarial.

No se anuló el decreto, pero las condiciones restrictivas para su aplicación lo hicieron inaplicable.

c) Un proyecto fue puesto a consideración de las autoridades uruguayas en marzo de 1979 manteniendo rasgos represivos, en especial al no reconocer la independencia de los sindicatos respecto al poder estatal y negar, mediante múltiples formas de intromisión represiva, su autonomía orgánica.

El régimen fascista uruguayo sobrevive mediante el ejercicio indiscriminado de la fuerza en medio de un profundo aislamiento social. La clase obrera y los trabajadores en su conjunto han resistido la represión fascista. Se han mostrado en la práctica de estos años oscuros de la historia uruguaya como la fuerza social más consecuentemente responsable en la lucha por la democracia y el progreso del Uruguay.

El ininterrumpido combate de la clase obrera, de sus aliados en el plano social y de sus vanguardias políticas, ha impedido que la dictadura uruguaya pudiera rodearse de un apoyo social amplio y ello se ha proyectado en el aislamiento político del régimen, en su fracaso para instrumentar una estructura estatal durable.